***Subproceso de Modernización Institucional***

***Proceso de Ejecución de las Operaciones***

***Dirección de Planificación***

***Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas***

***Elaborado por:***

*Inga. Hazel Calderón Mata*

*Lic. Eder Arias Vargas*

***Incorpora los acuerdos tomados por el Consejo Superior en:***

* ***Sesión extraordinaria 38-2020 celebrada el 17 de abril 2020, artículo XXI.***
* ***Sesión extraordinaria 45-2020 celebrada el 8 de mayo de 2020, artículo XII.***
* ***Sesión extraordinaria 48-2020 celebrada el 14 de mayo 2020, artículos VII y X.***
* ***Sesión extraordinaria de Corte Plena 31-2020 celebrada el 2 de junio de 2020, artículos I y II.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NOMBRE** | **Puesto** |
| **Aprobado por:** | Inga. Elena Gabriela Picado González | Jefa a.i. Subproceso Modernización Institucional |
| **Visto Bueno** | Lic. Nacira Valverde Bermúdez | Directora de Planificación |

Mayo, 2020

# **Oficios y referencias**

En el siguiente cuadro se detalla los números de oficios de la Secretaría General de la Corte que corresponden a las referencias internas de la Dirección de Planificación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No. Referencia Interna** | **No. Oficio de la Secretaría** | **Oficios Relacionados** |
| 1610-18 | 10473-18 | - |
| 1692-18 | 10880-18 | - |
| 1859-18 | - | Correo del 13-nov-18 de la Dirección de la Defensa Pública, sobre cantidad de usuarios indígenas |
| 150-19 | 951-19 | - |
| 384-19 | 2339-19 | - |

# Proyecto u oficinas analizadas

Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas.

# Antecedentes

Mediante oficio 37-CSP-18 del 9 de abril, de la Secretaría General de la Corte, se remite el acuerdo del Consejo Superior, sesión extraordinaria 25-18 del 4 de abril, donde se aprobó el informe 20-PLA-OI-2018, presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones, entre las que se destaca asignar siete plazas extraordinarias de Defensor Público para la atención de materia Agraria, por todo el período 2018 en apoyo del plan de descongestionamiento del Tribunal Agrario, y se estima la continuidad de las plazas de defensores para el período 2019.

Por otra parte, en relación con el Proyecto de Ley denominado*: “Carta de derechos sobre acceso a la justicia de los pueblos indígenas”*, expediente 17805; mediante oficio 10880-18 del 22 de agosto de 2018, de la Secretaría General de la Corte, se remite el acuerdo del Consejo Superior, en sesión 86-18, del 2 de octubre, artículo LXVI donde se acoge la solicitud presentada por la Jefatura de la Defensa Pública mediante oficio JEFDP-1123-2018 del 17 de setiembre de 2018 y se hace de conocimiento del acuerdo a la Dirección de Planificación con la finalidad que realice el análisis de todos los aspectos que implique el cambio por la entrada en vigencia de lo que ese entonces era el proyecto de Ley. En este particular, se resalta que la Ley 9593 de Acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica, entró en vigencia a partir de su publicación, la cual fue realizada en la Gaceta 179 (Alcance 174) del 28 de setiembre de 2018.

Además, mediante oficio JEFDP-1244-2018 del 1 de octubre de 2018, de la Dirección de la Defensa Pública señala que:

*“Dentro del estudio que realiza la Dirección de Planificación sobre las cargas de trabajo de plazas asignadas a la jurisdicción de Flagrancia, se valore la posibilidad de que algunas de estas plazas sean reasignadas a la atención de la población indígena para garantizar su acceso a la justicia (…)”*

En razón de lo anterior, mediante oficio 10473-18, del 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General de la Corte, se remite el acuerdo del Consejo Superior, en sesión 87-18 del 4 de octubre de 2018, artículo LXXXIV, donde se considera trasladar la gestión presentada por la máster Diana Montero Montero, Jefa a.i. de la Defensa Pública, mediante oficio JEFDP-1244-2018 del 1 de octubre de 2018, a estudio de la Dirección de Planificación, e informe a este Consejo lo que corresponde.

Por otro lado, en lo referente al patrocinio letrado de los servidores judiciales legalmente encomendado a la Jefatura de la Defensa Pública (artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), en la sesión 43-2019 del Consejo Superior artículo XL del 14 de mayo 2019, se acordó trasladar una plaza de persona defensora de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia *“para la atención de la nueva legislación que entró en vigencia a partir del 2018, atendiendo personas indígenas en los procesos Agrarios, Civiles, Contenciosos prioritariamente, así como defensa a servidores judiciales que son denunciados atendiendo las funciones inherentes a los cargos que desarrollan en el Poder Judicial, ya que se detectó la necesidad de reforzar estas funciones, pero no ha sido posible su asignación por la escases de recursos institucionales”.*

Por otro lado, mediante oficio 2339-19 del 6 de marzo de 2019, de la Secretaría de la Corte, se transcribe el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial en sesión 13-19 del 15 de febrero de 2019, que literalmente dice:

*“Acoger la gestión anterior, en consecuencia: Autorizar al doctor Roberto Montero García, Defensor Público Supervisor, para que como recargo asuma en codefensa con las y los defensores públicos agrarios la representación de las personas usuarias que requieran de servicios contenciosos administrativos; además, la defensa de los dos funcionarios de Gestión Humana que deben ser representados y que a su vez funja como capacitador de la Defensa Pública en litigio Contencioso Administrativo en aras de poder  asumir con responsabilidad  la competencia creada en la  Ley N°9530.”*

En otro orden de ideas, es relevante hacer mención que mediante el informe 34-PLA-EV-2017 de la Dirección de Planificación, sobre el Impacto organizacional y presupuestario para el Poder Judicial en caso de aprobarse el proyecto de Ley denominado “Código Procesal de Familia”; se analizó lo referente a la Defensa Pública en la atención de asuntos en materia de Familia, Violencia Doméstica y Pensión Alimentaria; donde, se consideró entre otros asuntos crear un total de 33 plazas de Defensor Público para la defensa de la parte actora en asuntos de Pensión Alimentaria. El citado informe fue conocido por el Consejo Superior en sesión extraordinaria de presupuesto 43-17, del 5 de mayo del 2017, artículo XXIV y por Corte Plena en sesión 16-2017, del 1 de junio del 2017, artículo II, durante las sesiones de trabajo para analizar el proyecto del Presupuesto de Poder Judicial para el 2018, y se acordó lo siguiente:

*“Sometido el asunto a votación, por unanimidad, se dispuso: Acoger la propuesta planteada por la magistrada Arias y el magistrado Salazar Alvarado, en consecuencia, los presupuestos actualizados de impacto de Justicia Restaurativa y de las Reformas Procesal de Familia y Agrario se conocerán en el momento en que sean Leyes de la República.”*

Seguido, la Dirección de Planificación da a conocer, por medio del oficio 1285-PLA-2019 del 16 de agosto de 2019 que, mediante correo electrónico del 13 de agosto del 2019, la Magistrada de la Sala Segunda Sra. Julia Varela Araya solicitó a la Dirección de Planificación modificar las estimaciones del impacto presupuestario que tendría la implementación del proyecto de Lay del Código Procesal de Familia que se tramita en el expediente 19455 de la Asamblea Legislativa. Donde, textualmente se expone lo siguiente:

*“…con la finalidad de disminuir el impacto económico de la implementación del referido código, se eliminaron tres temas importantes que contenían el mayor peso desde el punto de vista económico, para esta importantísima y necesaria reforma. Lo eliminado se refiere a: Los equipos interdisciplinarios, para los despachos de Familia que lo requerían*

1. *Los juzgados sumarios que se creaban*
2. *La Defensa Pública para atender en todos los casos de familia, donde se dieran intereses contrapuestos*

*Como consecuencia de lo anterior, en el tema de la Defensa Pública, el contenido del artículo 56, del proyecto de Ley consultado a Corte, cuyo informe se rindió el pasado lunes 12 de agosto,* *solo refleja lo que actualmente está dentro la Ley de Pensiones Alimentarias vigente; por lo que no debe de interpretarse que se están creando obligaciones nuevas de plazas para Defensa Pública, para atender casos de pensiones alimentarias.*

*En consecuencia, dentro de los costos del proyecto del Código Procesal de Familia, no debe existir ninguna suma para la creación de plazas de asistencia letrada de la Defensa Pública, tal y como lo expliqué ayer en Corte Plena, en el informe rendido.” (…)*

Por lo mencionado anteriormente, es importante indicar que, este nuevo planteamiento solicitado por la Magistrada Varela Araya, difiere del presentado ante la Comisión de Asuntos Jurídicos en el 2017, propiamente en cuanto a la exclusión de 33 plazas de Defensora o Defensor Público, que se requerirían para dar cobertura nacional a la atención en pensión alimentaria a la parte beneficiaria que no cuente recursos económicos para contratar patrocinio letrado conforme al artículo 56 del proyecto de este proyecto de Ley, donde no se debe interpretar que se están creando nuevas obligaciones de plazas para la Defensa Pública para atender casos de pensiones alimentarias.

El proyecto de Ley del “Código Procesal de Familia” fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa el 6 de febrero 2018.

En sesión 34-18 del 25 de abril de 2018 del Consejo Superior, se dispuso:

*“1) Aprobar el informe 33-PLA-MI-2018 presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones, de acuerdo al escenario planteado en la recomendación 5.1.2.*

*2)* ***Siguiendo los lineamientos de la Corte Plena no se deberán incluir los recursos en el anteproyecto 2019 hasta que se apruebe la Reforma Legal como Ley de la República****” (la negrita no es original del texto).*

El Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión extraordinaria 44-19 (Presupuesto 2020) artículo II, del 16 de mayo de 2019 acordó aprobar el informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación, sobre el Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (incluye materia disciplinaria, agraria y pensión alimentaria); donde se mantiene una plaza de persona Defensora por Oficina que cubre el tema de interés contrapuestos en materia agraria; y además, deben asumir la defensa técnica de aquellos asuntos Contenciosos Administrativos donde figure como parte actora o demandada una o más personas indígenas.

Posterior, el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión extraordinaria 47-19 (Presupuesto 2020) artículo XV, del 23 de mayo de 2019, dispuso de manera textual lo siguiente:

*“Aprobar las recomendaciones de la Dirección de Planificación, por tanto, mantener lo dispuesto por el Consejo Superior, se aclara a la Defensa Pública que precisamente por las razones expuestas en esta reconsideración, en el informe inicial se asignó un recurso humano para la zona de Buenos Aires por el impacto que representa en la prestación del servicio público”*

Este informe fue conocido y aprobado en la Sesión 22-19 de Corte Plena (Presupuesto 2020) celebrada el 6 de junio de 2019, Artículo IV; en el cual, se dispuso de manera textual:

*“Aprobar por separado del Presupuesto Ordinario del Poder Judicial, los requerimientos correspondientes a la “Ley 9593. Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica” en la forma indicada. Así votaron las magistradas y los magistrados Cruz, Solís, Molinari, Aguirre, Sánchez, Olaso, Chacón, Ramírez, Solano, Hernández, Salazar Alvarado, Araya, las Suplentes y los Suplentes León Díaz, Aragón Cambronero, Blanco González, Zúñiga Morales, Segura Bonilla, Alfaro Vargas y Chacón Jiménez.”*

Adicionalmente, en el informe definitivo 490-PLA-EV-2019, fue conocido en sesión 43-19, artículo XL del Consejo Superior 43-19, del 14 de mayo de 2019. En este caso el Consejo Superior, dispuso tener por rendido el informe definitivo; además, recomendó de manera textual:

*“(...) se reasignará esta plaza para la atención de la nueva legislación que entró en vigencia a partir del 2018, atendiendo personas indígenas en los procesos Agrarios, Civiles, Contenciosos prioritariamente, así como defensa a servidores judiciales que son denunciados atendiendo las funciones inherentes a los cargos que desarrollan en el Poder Judicial”.*

*“(…) Del análisis y seguimiento efectuado a las cargas de trabajo de los puestos de Defensora o Defensor Público, se recomienda mantener solo una de las dos plazas ordinarias, reconociendo la labor tan importante que desarrollan estas personas, sin embargo, se evidenció que estas labores pueden ser asumidas por uno de esos recursos.*

De esta forma y a partir de labores conexas que viene desarrollando la Dirección de Planificación en la Defensa Pública, se considera oportuno reasignar esta plaza de Defensora o Defensor Público para la atención de la nueva legislación que entró en vigencia a partir del 2018, para tender personas indígenas en los procesos Agrarios, Civiles, Contenciosos prioritariamente, así como defensa a personas funcionarias judiciales que son denunciadas atendiendo las funciones inherentes a los cargos que desarrollan en el Poder Judicial (…)”

En oficio 101-P-2019, de fecha 17 de mayo de 2019 y dirigido a la Ministra de Hacienda, el Presidente de la Corte y en alusión al oficio DM-0466-2019, mediante el cual se informó de la aplicación de la Regla Fiscal en el presupuesto 2020, entre otras ideas al referirse al monto máximo autorizado al Poder Judicial, se indicó:

*“(…) Es importante señalar que estos datos no incorporan los requerimientos asociados a las nuevas obligaciones impuestas por la Asamblea Legislativa por aprobación de leyes, los cuales será necesario solicitar ante el Ministerio de Hacienda de forma complementaria al presupuesto ordinario.”*

Posteriormente mediante oficio DM-0945-2019, de fecha 11 de junio del 2019, la señora Ministra de Hacienda y en alusión a lo indicado en el oficio 101-P-2019, comunica al presidente de la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

*“(…) Finalmente, en relación con las solicitudes complementarias al Anteproyecto de presupuesto de la institución a que se hace alusión en su oficio, le informo que el cumplimiento de la regla fiscal no da espacio para el financiamiento de nuevos gastos”.*

En el oficio 118-P-2019 del 14 de junio de 2019, el presidente de la Corte solicitó a la Ministra de Hacienda se valorara la posibilidad de contar con financiamiento adicional al gasto ordinario para atender esta y cinco nuevas obligaciones más encomendadas por la Asamblea Legislativa.

Mediante oficio 1538-PLA-PP-2019, de fecha 20 de setiembre de 2019, la Dirección de Planificación al revisar el Proyecto de Presupuesto 2020 trasladado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa y en relación directa con los recursos adicionales solicitados por el Poder Judicial para la atención de nuevas obligaciones, en el apartado A.1. se indicó lo siguiente:

*“(…) No fueron incorporados por el Ministerio de Hacienda al presupuesto ordinario, ni tampoco se remitieron como requerimiento adicional a la Asamblea Legislativa”.*

Este oficio mencionado anteriormente fue conocido por Corte Plena en sesión 41-2019, de fecha 30 de setiembre de 2019, artículo XV.

Finalmente, de acuerdo con la Ley No. 9791 Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2020, aprobada por la Asamblea Legislativa, se comprobó que los recursos para la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas no fueron incorporados durante la etapa de análisis y discusión por parte de la Asamblea Legislativa, esto según informe 1932-PLA-PP-2019 relacionado con el seguimiento realizado al Expediente 21.568 “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económica del 2020” en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Mediante el oficio 507-PLA-RH-MI-2020 del 30 de marzo el preliminar de este informe denominado Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso la Justicia de los Pueblos Indígenas, fue puesto en conocimiento de la Comisión de Acceso a la Justicia, la Defensa Pública, Dirección de Tecnología de Información y Dirección de Gestión Humana, con el fin de que emitieran sus observaciones para ser consideradas en el informe.

Como respuesta se recibió el oficio 662-DTI-2020 del 3 de abril y el 712-DTI-2020 del 15 de abril de 2020 de la Dirección de Tecnología de Información; y el oficio JEFDP- 365-2020 del 14 de abril de 2020 de la Jefatura de la Defensa Pública, donde emiten sus observaciones al respecto (ver anexo 10).

El Consejo Superior en sesión extraordinaria 38-2020 (Presupuesto 2021), celebrada el 17 de abril del año en curso, artículo XXI, referente al estudio de Requerimiento de Recurso Humano 507-PLA-RH-MI-2020, dispuso lo siguiente:

**“*Se acordó: 1.)******Aprobar el informe 507-PLA-RH-OI-2020 de la Dirección de Planificación y sus recomendaciones*** *(…)* ***2)*** *En relación con la solicitud de los recursos necesarios para la implementación de esta nueva legislación deberá solicitarse la incorporación de los recursos al Ministerio de Hacienda, de forma separada al Presupuesto ordinario, ya que constituyen necesidades adicionales para el Poder Judicial.* ***3.)******Rechazar las observaciones presentadas por la máster Diana Montero Montero, Jefa interina de la Defensa Pública y mantener el informe Nº 507-PLA-RH-OI-2020. 4.) Tomar nota de las observaciones presentadas por la máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de la Información y tener por corregidas las observaciones señaladas, dentro del citado informe.******Se declara acuerdo firme.****”*” (La negrita no es del original)

El 17 de abril de 2020, ingresó como respuesta extemporánea el oficio CACC-116-2020 suscrito por el Magistrado por el Magistrado Jorge Olaso Álvarez, Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia, donde emite sus observaciones al respecto (ver anexo 11).

El 27 de abril de 2020, se recibió de forma extemporánea el oficio PJ-DGH-SAP-135-2020 de la Licda. María Gabriela Mora Zamora, Jefa de Sección de Análisis de Puestos de la Dirección de Gestión Humana, donde realiza observaciones referentes al informe 507-PLA-RH-MI-2020 (ver anexo 12).

En sesión extraordinaria del Consejo Superior 45-2020 del 8 de mayo de 2020, artículo XXII fueron conocidos los oficios 659-PLA-RH-MI-2020 y 660-PLA-RH-MI-2020 donde se atendieron las observaciones planteadas por la Comisión de Acceso a la Justicia y por la Sección de Análisis de Puestos de la Dirección de Gestión Humana; en el mismo se dispuso por el Consejo Superior aprobar ambos oficios de la Dirección de Planificación y sus recomendaciones.

Posteriormente, como reconsideraciones al acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión extraordinaria 38-2020 (Presupuesto 2021), celebrada el 17 de abril del año en curso, artículo XXI, referente al estudio de Requerimiento de Recurso Humano 507-PLA-RH-MI-2020; se conoce el oficio 779-DTI-2020 del 29 de abril de 2020 y el 782-DTI-2020 ambos de la Dirección de Tecnología de Información (ver anexo 13); y el oficio JEFDP-450-2020 del 04 de mayo de 2020, suscrito por la M.Sc. Diana Montero Montero, Jefatura de la Defensa Pública (ver anexo 14).

En sesión extraordinaria del Consejo Superior 48-2020 del 14 de mayo en los artículos VII y X se conocieron los oficios 661-PLA-RH-MI-2020 de la Dirección de Planificación referente a las reconsideraciones planteadas por la Dirección de Tecnología de Información y el oficio 692-PLA-RH-MI-2020 en respuesta las reconsideraciones presentadas por la Jefatura de la Defensa Pública; en ambos artículos se dispuso aprobar los informes de la Dirección de Planificación y mantener lo dispuesto por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria 38-2020 (Presupuesto 2021), celebrada el 17 de abril del año en curso, artículo XXI.

Finalmente, en sesión extraordinaria de Corte Plena 31-2020 celebrada el 2 de junio de 2020, artículos I y II se acordó aprobar el Presupuesto ordinario del Poder Judicial para el 2021 correspondiente a la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica.

# Justificación

El siguiente informe responde a la actualización del análisis presentado para el presupuesto 2020 que contempla los cambios de entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, ya que en el presupuesto 2020 no se brindaron recursos para cubrir esta nueva legislación, por lo que nuevamente se revisa y actualiza el informe para conocimiento del Consejo Superior y Corte Plena.

# Metodología de trabajo

A continuación, se detallan las principales actividades realizadas:

De conformidad al informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación sobre el Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas en todas las materias, aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión extraordinaria 44-19 (Presupuesto 2020) artículo II, del 16 de mayo de 2019 y aprobado por Corte Plena mediante acuerdo del acta 022-2019 del 06 de junio de 2019; se da seguimiento a las recomendaciones expresas en dicho informe, con el propósito de determinar su cumplimiento.

Seguidamente, mediante correo electrónico, el 27 de enero de 2020, se le solicita a la Licda. Ligia Jiménez Zamora, Supervisora de Personas Indígenas, la información estadística relacionada con asuntos atendidos por la Defensa Pública que contengan intervinientes de población indígena durante el año 2019, con la finalidad de analizar el comportamiento de la atención de los asuntos a nivel nacional.

Así mismo, mediante el correo electrónico enviado el 03 de febrero de 2020, se le solicita al Tribunal Contencioso Administrativo, los datos estadísticos referentes a asuntos donde figuran como intervinientes personas servidoras judiciales e indígenas, sea como Asociación Integral de Desarrollo o como persona física. De ahí que, el día 04 de febrero de 2020, se recibe correo electrónico de respuesta con el listado de asuntos que lleva el Tribunal e indicando que, únicamente se pueden filtrar los asuntos activos, en los cuales se encuentran como parte una asociación indígena o la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, no así, como persona física o persona servidora judicial.

Adicionalmente, el 03 de febrero de 2020 se coordina una sesión de trabajo con la Administración de la Defensa Pública, respaldada en la minuta 29-PLA-MI-MNTA-2020; con el propósito de identificar el impacto dado en la Defensa Pública a partir de la implementación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas y, recibir retroalimentación de la manera de trabajo optada por la administración para solventar las necesidades de la población en mención.

Con base en la información recolectada en reunión mencionada en el párrafo anterior y, con la información estadística enviada por la Administración de la Defensa Pública; se procede a analizar las cargas de trabajo de las plazas de Defensora o Defensor Público responsables de la tramitación de asuntos con interviniente persona usuaria indígena.

Seguido, se consultó a Unidad de Capacitación de la Defensa Pública sobre los lineamientos establecidos por parte de la Jefatura de la Defensa Pública para cubrir el tema de capacitación del personal de la Defensa Pública en la tramitación de asuntos con interviniente persona usuaria indígena.

Finalmente, se realizan consultas al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) para obtener estadísticas de la población indígena, a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) para segmentar la población por territorio según etnia y Defensas Públicas regionales de las zonas donde se concentra la mayor densidad de personas indígenas, para obtener particularidades de las poblaciones.

# Información relevante

## Aspectos demográficos a considerar

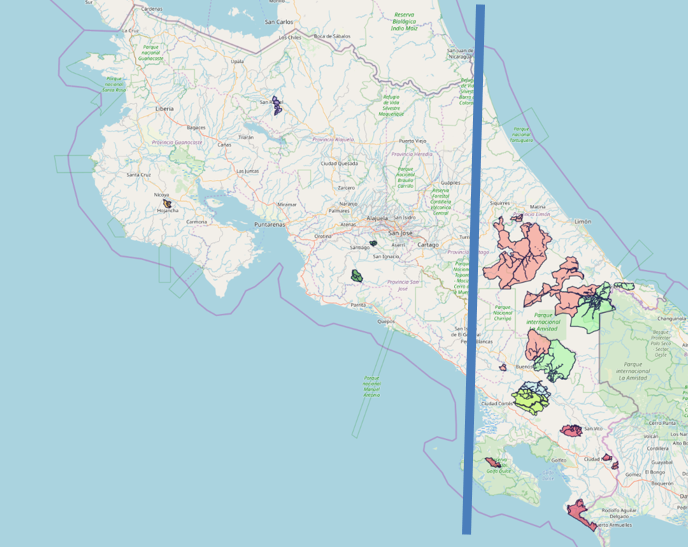
Con base en la consulta realizada al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la población indígena, según el censo 2011, es de 104 143 personas, las cuales están distribuidas a lo largo del territorio nacional, segmentada en ocho etnias:

* Bribrí
* Brunca
* Teribe
* Gnobe o Guaymí
* Huetar
* Maleku (Región Norte)
* Chorotega
* Cabécar

Las etnias que agrupan la mayor cantidad de población son los Bribris con un 35% y los Cabécar con 29%. Estas dos etnias representan un 64% sobre el total de la población indígena en Costa Rica.

En la siguiente figura se muestra la concentración de territorios indígenas de Costa Rica, según el Sistema Georeferencial del Poder Judicial.

Figura 1 Mapa de territorios indígenas de Costa Rica



**Fuente**: Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación, con datos tomados del Sistema Georeferencial del Poder Judicial.

Con datos estadísticos del INEC y según la distribución de territorios, se puede determinar que un 78% de los pueblos indígenas se encuentran en las zonas ubicadas al sur del país, viviendo en las provincias de Limón 26%, Puntarenas 24%, San José (zona sur) 19% y Cartago 8%. El restante 22% se encuentra distribuido en Guanacaste 10%, Alajuela 8% y Heredia 4%. Por tal motivo, se considera atender de forma prioritaria las zonas con mayor densidad de población indígena ubicadas en el sur.

En virtud de los datos anteriores y, con los obtenidos de la distribución de poblaciones indígenas del CONAI, se realiza una estimación de la posible afluencia de personas indígenas según las defensas públicas más cercanas.

Figura 2 Distribución porcentual de posible atención de persona indígena, según territorios y ubicaciones de la Defensas Públicas del país

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Como resultado se obtuvo que Bribri (29%), Buenos Aires (26%), Limón (12%) y Turrialba (8%), son las zonas que pueden tener mayor demanda en la atención de asuntos indígenas según su ubicación geográfica, densidad de población indígena y la presunta movilización de personas; pues, en conjunto agrupan el 75% de la posible afluencia.

En síntesis, según los datos demográficos obtenidos del INEC y según la competencia de las defensas públicas del país ante la presunta movilización de personas indígenas, se puede ver que las zonas de Bribri y Buenos Aires en conjunto poseen el 55% de la posible demanda, ubicadas muy por encima de las otras defensas públicas del país.

Por otro lado, el 30 de abril de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la resolución 16/15 con la medida cautelar 321-12 donde solicita al Gobierno de Costa Rica, adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre, quienes se encuentran en el sureste del Puntarenas; importante mencionar que esta zona es competencia de la Defensa Pública de Buenos Aires.

## Análisis de datos estadísticos de la Defensa Pública

### Representación de la Defensa Pública en asuntos con personas usuarias indígenas

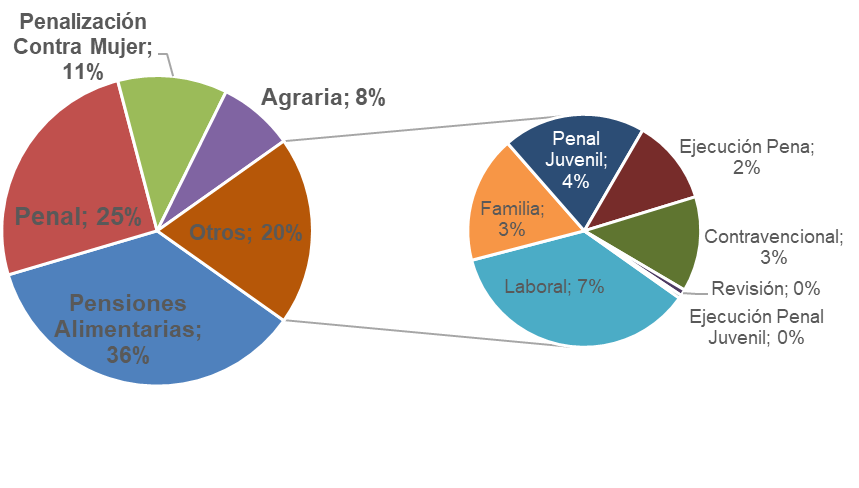
Como parte del proceso de recopilación de datos estadísticos, se solicita al Lic. Esteban Arguedas Madrigal, Coordinador de la Unidad Estadística de la Defensa Pública, y a la Licda. Ligia Jiménez Zamora, Supervisora de Asuntos de Pueblos Indígenas; la información estadística de la cantidad de personas usuarias indígenas representadas por la Defensa Pública en asuntos nuevos, de octubre de 2018 a setiembre de 2019; así como también, la cantidad de procesos activos (circulante) y asuntos terminados al cierre de setiembre de 2019 por cada una de las oficinas a nivel nacional.

En cuanto a los datos suministrados por la Defensa Pública, se encuentra la cantidad de procesos (expedientes) activos al cierre de setiembre de 2019, así como la cantidad de expedientes que ingresaron de octubre 2018 a setiembre 2019 y la cantidad de personas usuarias indígenas representadas en dichos asuntos.

Es importante aclarar que, según indica el Lic. Esteban Arguedas Madrigal, Coordinador de la Unidad Estadística de la Defensa Pública; por orden se contabilizan por separado las representaciones y expedientes con interviniente persona usuaria indígena de la competencia antigua y la actual, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia a los Pueblos Indígenas, donde se le amplía la competencia a la Defensa Pública.

En la siguiente figura se muestra la representación por materia de los expedientes, donde se cuenta como interviniente una persona usuaria indígena y, que ingresaron de octubre 2018 a setiembre 2019:

Figura 3 Representación por materia de los asuntos ingresados, donde intervienen personas usuarias indígenas, de octubre 2018 a setiembre 2019



**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Con base en la información mostrada en la figura anterior, se puede inferir que, el 80% de la cantidad de expedientes, de octubre 2018 a setiembre 2019, responden a personas indígenas en calidad de intervinientes en asuntos de Pensiones Alimentarias (36%), Penal ordinario (25%), Penalización de violencia contra mujer (11%) y Agrario (8%). El restante 20% de los asuntos entrados es en Laboral, Penal Juvenil, Familia, Ejecución de la Pena, Contravencional, Revisión y Ejecución Penal Juvenil.

Dicho lo anterior, en la siguiente tabla se evidencia la proporción de procesos entrados (expedientes), respecto a la cantidad de personas usuarias indígenas representadas en dichos procesos.

Tabla 1 Cantidad de asuntos entrados, de octubre 2018 a setiembre 2019, y la cantidad de personas usuarias indígenas intervinientes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materia** | **Cantidad de expedientes** | **Personas indígenas** | **Promedio de personas indígenas por expediente** | **Diferencia** |
| Pensiones Alimentarias | 412 | 438 | 1,06 | 26 |
| Penal | 295 | 369 | 1,25 | 74 |
| Penalización Contra Mujer | 132 | 150 | 1,14 | 18 |
| Agraria | 91 | 102 | 1,12 | 11 |
| Demás materias | 227 | 241 | 1,06 | 14 |
| **Total** | **1157** | **1300** | **1,12** | **143** |

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Con base en la tabla anterior, se puede observar que, un proceso (expediente) mantiene en promedio 1,12 personas usuarias indígenas como intervinientes, en los cuales hay 143 personas usuarias indígenas en calidad de interviniente en asuntos donde hay dos o más personas indígenas intervinientes.

Haciendo la segregación por materia, se evidencia que, de los asuntos que ingresaron de octubre de 2018 a setiembre 2019, la materia penal mantiene la mayor proporción de cantidad de personas usuarias indígenas por expediente (1,25); es decir, hay 74 personas usuarias indígenas que se mantienen en procesos con dos o más intervinientes. Aunado a lo anterior, materia agraria mantiene un promedio de 1,12 personas usuarias indígenas por proceso, pero 11 personas se mantienen en asuntos con dos o más intervinientes. Las demás materias mantienen en promedio 1,06 personas indígenas intervinientes por cada expediente, lo anterior equivale a que solo 6 de cada 100 personas indígenas, en los asuntos ingresados, sean partícipes en asuntos con dos o más intervinientes.

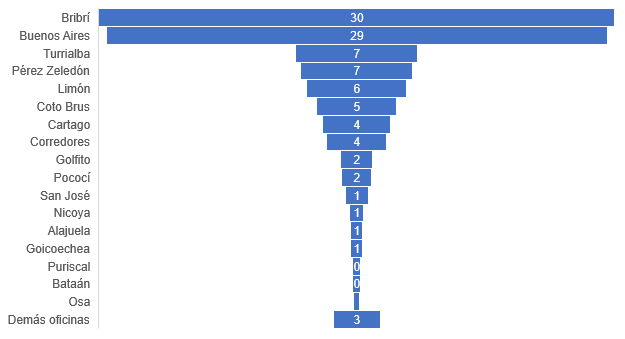
Ahora bien, se tiene como excepción algunos asuntos conocidos dentro de la Defensa Pública, donde la Supervisora de Asuntos Indígenas indica que intervienen gran cantidad de personas usuarias indígenas y por ello, se toma en consideración dentro del análisis actual.

Sin embargo, con base en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 *“Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (incluye materia disciplinaria, agraria y pensión alimentaria)”* y el presente análisis estadístico, se infiere técnicamente que dichos expedientes responden a casos aislados y se encuentran fuera de los límites de control, debido a que en el amplio periodo de tiempo de estudio no se refleja el comportamiento descrito.

Además, de la **Tabla 1 Cantidad de asuntos entrados, de octubre 2018 a setiembre 2019, y la cantidad de personas usuarias indígenas intervinientes**; se puede inferir que la entrada promedio mensual de asuntos, a nivel nacional, es de 103, con 116 personas usuarias indígenas intervinientes. De esos 103 asuntos nuevos a nivel nacional, en promedio 37 son de Pensiones Alimentarias, 26 de Penal Ordinario, 12 de Penalización de Violencia contra Mujer, 8 de materia agraria y, las restantes 20 causas son Laboral, Familia, Penal Juvenil, Ejecución de la Pena, Contravencional, Revisiones y Ejecución de la Pena en Penal Juvenil.

Ahora, en la siguiente figura se evidencia la concentración mensual por oficina de la Defensa Pública, de la cantidad de asuntos entrados con personas usuarias indígenas durante octubre 2018 hasta setiembre 2019.

Figura 4 Cantidad de asuntos entrados de octubre 2018 a setiembre 2019, con personas indígenas representadas por la Defensa Pública



**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Con base en la información mostrada en la figura anterior, en un primer bloque se puede inferir que la mayor concentración de asuntos con personas usuarias indígenas se encuentra en la Defensa Pública de Buenos Aires, con un promedio de ingreso mensual de 30 expedientes; seguido de la Defensa Pública de Bribri, con un promedio de ingreso mensual de 29 asuntos. Las dos oficinas de la Defensa Pública mencionadas anteriormente responden al 58% del total de asuntos entrados a nivel nacional.

Lo anterior, es congruente con la cantidad de población indígena en las zonas, según los datos demográficos detallados en el apartado anterior.

Ahora bien, en la figura anterior, como un segundo bloque, podemos observar que las oficinas de la Defensa Pública de Turrialba, Pérez Zeledón, Limón, Coto Brus, Cartago y Corredores mantienen un promedio de ingreso mensual entre cuatro y siete representaciones.

Estas oficinas representan un 31% del total de representaciones mensuales, el equivalente a 32 personas usuarias indígenas. Haciendo la aclaración que, según explica la Licda. Ligia Jiménez Zamora, Supervisora de Pueblos Indígenas, debido a la necesidad particular de cada oficina, se ha optado por que personas defensoras se trasladen una o dos veces por semana a brindar soporte a otras oficinas; tal es el caso de Pérez Zeledón que brinda soporte a Buenos Aires, Cartago a Turrialba, Limón a Bribri y Corredores a Coto Brus.

De lo anterior y, considerando que el control de asuntos se realiza por el Libro de Registro de la Defensa Pública por persona defensora, se podría reportar expedientes de personas usuarias indígenas en las oficinas que brindan el soporte, cuando la persona indígena es atendida en la oficina a la que se le brinda dicha colaboración.

Finalmente, en un tercer bloque, el restante 11% del ingreso mensual de representaciones a personas indígenas, equivale a un promedio de 11 personas y, estas se distribuyen en el resto del país en las diferentes materias.

Es importante aclarar que el registro e informe de personas usuarias y procesos se realiza en la oficina en que se atiende según la competencia territorial, no en la oficina de la que se brinda la colaboración.

Dicho lo anterior, la siguiente tabla muestra la cantidad de personas representadas en asuntos nuevos en promedio por mes, en las oficinas que representan el 89% de las representaciones de la Defensa Pública a nivel nacional.

Tabla 2 Promedio de asuntos mensuales entrados en las oficinas que representan el 89% del ingreso mensual a nivel nacional

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oficina** | **Pensiones Alimentarias** | **Penal** | **Penalización Contra Mujer** | **Agraria** | **Demás materias** | **Total** |
| Bribrí | 14 | 8 | 6 | 0 | 3 | 30 |
| Buenos Aires | 6 | 10 | 4 | 2 | 7 | 29 |
| Turrialba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Pérez Zeledón | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Limón | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Coto Brus | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Cartago | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Corredores | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Demás oficinas | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| **Total** | **37** | **26** | **12** | **8** | **20** | **103** |

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

*Nota: La Defensa Pública reporta, de octubre 2018 a setiembre 2019, asuntos entrados con persona usuaria indígena en 34 oficinas; por lo que la fila “Demás oficinas” contempla un total de 26 oficinas.*

De la tabla anterior se puede extraer que, el promedio de ingreso mensual de asuntos mensuales es similar para la Defensa Pública de Bribri (30) y Buenos Aires (29). No obstante, la segmentación de asuntos entrados por materia varía en su comportamiento, debido a que en Bribri el 46% de los asuntos entrados son de Pensiones Alimentarias (14), mientras que, en Buenos Aires el 34% de los asuntos entrados son Penales Ordinarios (10).

Las oficinas de Turrialba, Pérez Zeledón, Limón, Coto Brus, Cartago y Corredores mantienen una representación mensual entre uno y tres asuntos en Pensiones Alimentarias y, entre uno y dos asuntos en Penal Ordinario.

Respecto a Penalización de Violencia contra la Mujer, se observa que las oficinas de Bribri y Buenos Aires presentan una entrada mensual promedio de seis y cuatro, respectivamente. Las demás oficinas de la Defensa Pública a nivel nacional mantienen un ingreso promedio mensual igual o inferior a uno, por lo que se puede decir que hay meses que ingresa un asunto nuevo y meses donde no hay un ingreso.

Respecto a las causas entradas en materia agraria, en la tabla anterior se evidencia que, la Defensa Pública de Buenos Aires, Pérez Zeledón y Cartago mantienen un promedio mensual de dos asuntos; en las demás oficinas hay meses que ingresa un asunto y meses en los que la entrada es nula.

Es importante recordar que la Defensa Pública de Pérez Zeledón le brinda soporte a la Defensa Pública de Buenos Aires y, en ese sentido, se puede inferir que la mayor cantidad de asuntos agrarios entrados se encuentran en el Primer Circuito Judicial de la Zona Sur.

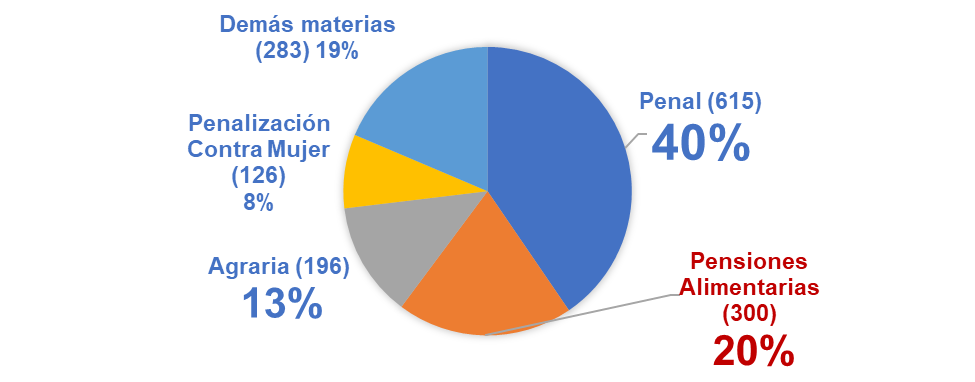
En los expedientes contabilizadas en “Otras materias”, la Defensa Pública de Buenos Aires presenta el ingreso del 37% de las representaciones nuevas por mes; por lo que es importante mencionar que dichos asuntos se concentran en Laboral (un asunto mensual), Penal Juvenil (3 asuntos mensuales), Familia (2 asuntos mensuales) y Contravencional (2 asuntos mensuales). Además, la Defensa Pública de Bribri el promedio de “Otras materias” se mantiene en tres causas nuevas por mes, concentradas principalmente en materia Laboral.

Finalmente, cabe manifestar que la representación en materias como Penal, Laboral, Agrario, Pensiones, Penalización contra la mujer y Penal juvenil, se atiende por la Defensa Pública, desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas.

### Circulante de asuntos con interviniente persona usuaria indígena, antes y después de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a los Pueblos Indígenas

Con base en los datos estadísticos facilitados por el Lic. Esteban Arguedas Madrigal, Coordinador de la Unidad Estadística de la Defensa Pública; se tiene que, con base en la competencia de la Defensa Pública antes de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas, al cierre del mes de setiembre de 2019, el circulante a nivel nacional de asuntos con persona usuaria indígena en calidad de interviniente es el siguiente:

Figura 5 Circulante activo con la competencia antes de la promulgación de la Ley 9593, con interviniente persona indígena, al cierre de setiembre de 2019



**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

El gráfico anterior segmenta las materias que representan el 80% del circulante, con la competencia antes de la promulgación de la Ley 9593, de la población indígena a nivel nacional, donde se puede observar que el 40% de los asuntos activos se concentran en materia penal (615 expedientes), el 20% en Pensiones Alimentarias (300 expedientes), el 13% en materia agraria (196 expedientes), el 8% en Penalización de Violencia contra Mujer (126 expedientes) y, el restante 20% se concentra en las demás materias (283 expedientes).

Haciendo la comparación entre la **Figura 3 Representación por materia de los asuntos ingresados, donde intervienen personas usuarias indígenas, de octubre 2018 a setiembre 2019** y la **Figura 5 Circulante activo con la competencia antes de la promulgación de la Ley 9593, con interviniente persona indígena, al cierre de setiembre de 2019**, se tiene que, a pesar que el mayor ingreso mensual se encuentra en Pensiones Alimentarias, el circulante demuestra se concentra principalmente en materia penal. De conformidad con lo anterior, se puede concluir el tiempo de tramitación de asuntos de Pensiones Alimentarias es menor al tiempo de tramitación de asuntos Penales.

Ahora, en la siguiente tabla se muestra la concentración de asuntos activos, con persona usuaria indígena en calidad de interviniente y, con la competencia antes de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas, por oficina de la Defensa Pública y materia, al cierre de setiembre de 2019.

Tabla 3 Asuntos activos con persona indígena conforme a la competencia de la Defensa Pública antes de la promulgación de la Ley 9593, al cierre de setiembre de 2019, segregado por materia y oficina

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oficina** | **Penal** | **Pensiones Alimentarias** | **Agraria** | **Penalización Contra Mujer** | **Demás materias** | **Total** |
| Bribrí | 302 | 102 | 0 | 57 | 32 | **493** |
| Buenos Aires | 163 | 102 | 44 | 30 | 111 | **450** |
| Limón | 23 | 18 | 25 | 8 | 32 | **106** |
| Coto Brus | 54 | 9 | 0 | 22 | 5 | **90** |
| Pérez Zeledón | 3 | 21 | 32 | 0 | 19 | **75** |
| San José | 10 | 2 | 22 | 1 | 31 | **66** |
| Corredores | 20 | 12 | 12 | 3 | 14 | **61** |
| Demás oficinas | 40 | 34 | 61 | 5 | 39 | **179** |
| **Total** | 615 | 300 | 196 | 126 | 283 | **1520** |

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Considerando la información mostrada en la tabla anterior, con la competencia de la Defensa Pública antes de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas; la Defensa Pública de Bribri es la que mantiene, al cierre de setiembre de 2019, la mayor cantidad de procesos activos (493 expedientes), seguido de la Defensa Pública de Buenos Aires (450 expedientes). Estas dos oficinas mantienen el 62% del total de causas activas a nivel nacional.

Es importante resaltar que, la Defensa Pública de San José mantiene, al cierre de setiembre de 2019, un total de 66 asuntos activos, donde 22 son de materia agraria, 10 de materia penal, 2 de Pensiones Alimentarias, 1 de Penalización de Violencia contra Mujer y hay 31 expedientes que se encuentran contabilizados en “Demás materias”. Importante mencionar que esas 31 causas son de Ejecución de la Pena (13), Laboral (9), Ejecución de la Pena en Penal Juvenil (7) y Revisión (2).

Finalmente, es importante hacer mención que, como se explicó anteriormente, la Administración de la Defensa Pública contabiliza dentro de sus datos estadísticos los asuntos en los que se representan personas usuarias indígenas producto de la entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas y por tal, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de personas indígenas representadas en razón de la ampliación de la competencia de la Defensa Pública, al cierre del mes de diciembre de 2019.

Tabla 4 Personas Indígenas que mantienen procesos en trámite en la Defensa Pública en razón del cumplimiento de la Ley 9593, al 31 de diciembre 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oficina** | **Pensiones Alimen-tarias** | **Familia** | **Contencioso Administrativo** | **Violencia Doméstica** | **Contravencional** | **Civil** | **Otro** | **Total** |
| Buenos Aires (2) | 23 | 32 | 1 | 5 | 2 |  | 3 | **66** |
| Bribrí (3) | 29 | 11 |  | 6 | 3 | 1 |  | **50** |
| San José |  |  | 38(1) |  |  | 1 |  | **39** |
| Turrialba | 1 | 3 |  | 7 |  |  |  | **11** |
| Corre-dores | 2 | 9 |  |  |  |  |  | **11** |
| Golfito | 8 | 1 |  | 1 |  |  |  | **10** |
| Alajuela |  |  |  |  |  | 2 |  | **2** |
| Brus | 2 |  |  |  |  |  |  | **2** |
| Puriscal |  | 1 |  |  |  |  |  | **1** |
| **Total** | **65** | **57** | **39** | **19** | **5** | **4** | **3** | **192** |

\*1 Estos procesos llevan codefensa, por lo que es requerida la asignación de dos profesionales

\*2 Estos procesos son atendidos por profesionales de la oficina de Pérez Zeledón

\*3 Estos procesos son atendidos por profesionales de la oficina de Limón

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Las representaciones mostradas en la tabla anterior responden a asuntos que iniciaron en razón del cumplimiento de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a las personas indígenas, esto debido a que, por ejemplo, en Pensiones Alimentarias, esas 65 personas representadas están en calidad de demandadas. Y, es importante aclarar que los asuntos presentados en la tabla anterior no se encuentran contabilizados dentro del análisis expuesto anteriormente, debido al orden de tabulación de la información por parte de la Administración de la Defensa Pública. Por lo que, lo que se encuentra establecido en la tabla anterior es lo que realmente corresponde al incremento en las cargas de trabajo a partir de la promulgación de la Ley 9593.

Respecto a los asuntos Contenciosos Administrativos, es importante hace énfasis de que se reportan 39 representaciones al cierre de diciembre de 2019.Estos asuntos mantienen la particularidad de que requieren codefensa, por lo que al menos deben participar dos Defensoras o Defensores en su tramitación.

En consulta con la Coordinación de la Defensa Pública de Buenos Aires, el Licenciado Andrey Fuentes Gamboa, se expone que, por indicación de la Jefatura de la Defensa Pública, los asuntos contenciosos administrativos con interviniente persona indígena se asignan como recargo a las personas defensoras agrarias y por tal, desde que recibió la indicación, el único asunto que ha ingresado a la oficina es el que tiene asignado dentro de su circulante la persona defensora de materia agraria.

Adicionalmente, como se ha hecho mención, la Defensa Pública de Pérez Zeledón le brinda soporte a la oficina de Buenos Aires y la Defensa Pública de Limón le brinda soporte a la oficina de Bribri, tanto para la tramitación de asuntos ordinarios, como para la tramitación de asuntos donde se requiera representar a ambas partes del proceso.

Por último, en consulta al Lic. Esteban Arguedas Madrigal, Coordinador de la Unidad Estadística de la Defensa Pública; las tres representaciones contabilizadas en otras materias responden a una Querella y representaciones en materia de Tránsito.

Por otra parte, según lo expuesto por la Licda. Ligia Jiménez Zamora, Supervisora de Personas Indígenas de la Dirección de la Defensa Pública, a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas; y de una manera muy proactiva por parte de la Defensa Pública, los asuntos en materia de Familia forman parte del circulante de las personas defensoras que atienden Pensiones Alimentarias, los asuntos de Contencioso Administrativo en el circulante de las personas defensoras de Agrario, y los asuntos en materia de Violencia Doméstica pasan a formar parte del circulante de las Defensoras y Defensores que atienden materia penal.

Además, señala que dentro del análisis de los procesos que consideren población indígena, a parte de la cantidad de personas usuarias y cantidad de causas, debe contemplarse factores cualitativos tales como, la calidad de atención a partir de un acceso de justicia efectivo, y reconocer las necesidades de atención diferenciada; respetando las distancias, las condiciones de pobreza, medios de transporte, los horarios de visitas en situ, idiomas; así como, las pericias culturales.

Relevante resaltar que, para la atención de aquellos asuntos ordinarios de la materia de Penal y Pensión Alimentaria, en los cuales; además, forma parte del circulante activo asuntos con intervinientes de asuntos indígenas, las Oficinas de la Defensa Pública de Bribrí, Buenos Aires, Turrialba, Limón y Coto Brus mantiene la siguiente estructura:

Tabla 5 Estructura para la atención de asuntos en materia Penal y Pensión Alimentaria, de las Oficinas que atienden asuntos indígenas, a marzo de 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cantidad de recurso Defensor por materia** | **Penal** | **Pensiones alimentarias** |
| Bribri | 4 | 1 |
| Buenos Aires | 3 | - |
| Turrialba | 5 | 1 |
| Limón | 12 | 3 |
| Coto Brus | 2 | - |

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por las oficinas de la Defensa Pública.

Haciendo la comparación de la estructura organizacional con la que contaba cada una de las oficinas mencionadas en la tabla anterior, con base en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 y la minuta 48-PLA-MI-MNTA-2019, se infiere que la Jefatura de la Defensa Pública reforzó el personal defensor para la tramitación de asuntos penales, haciendo traslado de recursos de Defensora o Defensor Público, como fue el caso de la Defensa Pública de Bribri y Buenos Aires.

Por último, es importante aclarar que, a pesar de que en la tabla anterior se evidencie que algunas oficinas no cuentan con recursos de Defensora o Defensor Público en materia de Pensiones Alimentarias, para poder tramitar adecuadamente estos asuntos, reciben colaboración de oficinas cercanas. Tal es el caso de la Defensa Pública de Bribri, que recibe colaboración de la oficina de Limón; así como, la Defensa Pública de Buenos Aires mantiene colaboración de Pérez Zeledón

Para la tramitación de asuntos de Pensiones Alimentarias, la Defensa Pública de Limón le brinda colaboración a la oficina de Bribri para la representación de las personas usuarias indígenas demandadas. Así como, la Defensa Pública de Pérez Zeledón le brinda colaboración a Buenos Aires, siendo dos profesionales los que se trasladan a la oficina para poder representar a las personas usuarias indígenas ofendidas y demandas.

Además, la Defensa Pública de Turrialba recibe colaboración de Cartago (un día por semana) y, la Defensa Pública de Coto Brus mantiene colaboración de Corredores (un día por semana). En este último despacho, aunque no se cuente en la estructura organizacional ordinaria con una persona defensora especializada en Pensiones Alimentarias, una Defensora o Defensor Público de materia penal mantiene un recargo de Pensiones Alimentarias.

### Atención de asuntos con persona usuaria indígena en el Tribunal Contenciosos Administrativo

En consulta a los servidores judiciales del Tribunal Contencioso Administrativo, mediante el correo enviado a la cuenta oficial del despacho el 03 de febrero de 2020, se indica literalmente que:

*“(...) En este despacho se continúa trabajando con los filtros que se indican en el Sistema de Gestión, aún no contamos con mejoras para determinar la cantidad de procesos de personas servidoras judiciales y en el caso de las personas indígenas, al igual que hace un año se pueden filtrar únicamente los procesos en los cuales se encuentran como parte alguna asociación indígena o la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, como se muestra en cuadro adjunto.”*

En razón de lo anterior, se puede decir que, al 03 de febrero de 2020, los filtros con los que cuentan los sistemas informáticos del Tribunal Contencioso Administrativo no permiten determinar la cantidad de procesos donde intervenga al menos una persona usuaria indígena o una persona servidora judicial, según las recomendaciones emitidas en el informe **634-PLA-RH-MI-2019 *“Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (incluye materia disciplinaria, agraria y pensión alimentaria)”***.

Seguido, se procede al análisis del archivo suministrado, entendiendo las observaciones señaladas por el personal judicial del despacho, donde se registran 257 números de expedientes atendidos por el Tribunal Contencioso Administrativo. Mientras que, al cierre de enero 2019, en el informe **634-PLA-RH-MI-2019 *“Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (incluye materia disciplinaria, agraria y pensión alimentaria)”***, se reportan 240 expedientes. Por lo que, se puede inferir que, en el año 2019 ingresaron 17 asuntos, el equivalente a 1,41 asuntos por mes.

Es importante aclarar que, los expedientes reportados por el Tribunal Contencioso en los cuales se incluye como parte una asociación de personas indígenas o la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, contabiliza la totalidad de expedientes ingresados al Sistema de Gestión del despacho, inclusive los archivados, pasivos o los que se encuentran asignados a alguna persona servidora del despacho. Por lo anterior, para determinar el análisis de expedientes activos al 04 de febrero de 2020, se excluyen los asuntos en ubicación pasiva y, por ende, se tiene un total de 97 expedientes activos. En la siguiente tabla se muestra la segregación de expedientes activos, del Tribunal Contencioso Administrativo, figura como intervinientes una asociación de personas indígenas.

Tabla 6 Circulante del Tribunal Contencioso Administrativo como parte se encuentra una asociación de personas indígenas, al febrero de 2020

|  |  |
| --- | --- |
| **Parte (interviniente)** | **Cantidad** |
| Comisión Nacional de Asuntos Indígenas | 62 |
| Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kekoldi | 12 |
| Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Salitre | 9 |
| Asociación Indígena Huetar de Zapatón de Puriscal | 4 |
| Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bri-Bri De Talamanca | 3 |
| Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Rey Curré Boruca | 2 |
| Asociación de Desarrollo Indígena Altos de San Antonio | 1 |
| Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena San Rafael De Cabagra | 1 |
| Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Quit | 1 |
| Asociación de Desarrollo Integral De La Reserva Indígena Chirripó | 1 |
| Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Térraba | 1 |
| **Total, de expedientes** | **97** |

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por el Tribunal Contencioso Administrativo.

En este partícular, tal como se hizo mención en líneas anteriores, únicamente se identifica la intervención de personas indígenas cuando participan en asociaciones u organizaciones; es decir, la cantidad de asuntos donde se participa como parte demandada o actora sin la representación de una asoción y/u organización presenta una limitante estadísitica en los sistemas actuales, para determinar la cantidad de asuntos Contenciosos Administrativos donde intervinen personas indígenas y así estimar la proyección de la demanda del proceso.

De igual manera, se puede observar en la tabla anterior que, de los 97 expedientes activos, 62 mantienen como intervinientes a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, mientras que la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kelkoldi mantiene 12 expedientes activos. Las dos asociaciones mencionadas anteriormente representan el 76% de la totalidad de causas activas. Es importante mencionar que el terrorio Kelkoldi pertenece a la Cordillera de Talamanca, donde prevalece la etnia Bribri.

Por lo tanto, es importante destacar lo acordado sesión del Consejo Superior 43-19 del 14 de mayo del 2019, artículo XL, donde aprobó trasladar de la Secretería Técnica de Género la plaza de Defensor Público (369766) ocupada por el Lic. Jorge Sánchez Solano hacia la Defensa Pública de San José, para la atención de la nueva legislación que entró en vigencia a partir del 2018, atendiendo personas indígenas en los procesos Agrarios, Civiles, Contenciosos prioritariamente, así como defensa a servidores judiciales que son denunciados atendiendo las funciones inherentes a los cargos que desarrollan en el Poder Judicial.

Sin embargo, en sesión 60-19 del Consejo Superior del 4 de julio de 2019, artículo VIII, se aprobó un recurso de reconsideración el cual fue acogido parcialmente, por lo que la Jefatura de la Defensa Pública debió de mantener al licenciado Sánchez Solano destacado en una de las oficinas del Primer Circuito Judicial de San José, reforzando aquellas áreas que estime conveniente, y de acuerdo a los conocimientos que tenga don Jorge.

Por lo anterior, la Jefatura de la Defensa Pública solventó la necesidad movilizando al Dr. Roberto Montero García para la atención de esta materia.

### Atención de asuntos agrarios

En sesión del Consejo Superior 44-19 artículo II, se aprobó el informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación referente al impacto de la entrada en vigencia de la ley 9593 de acceso a la justicia a pueblos indígenas, posteriormente la Corte Plena en sesión 47-19 (Presupuesto 2020), celebrada el 23 de mayo de 2019 aprueba la comunicación del informe 102-CSP-19, en el mismo se aprueba cambiar la condición de siete plazas de recurso defensor que se encontraban extraordinarias para la atención de materia agraria, a condición ordinarias; asumiendo además de materia agraria la defensa técnica de aquellos asuntos Contenciosos Administrativos donde figure como parte actora o demandada una o más personas indígenas. En el caso de aquellas plazas, donde la carga de trabajo no alcance la cuota establecida, se le asignará asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo.

De tal manera, se considera que con la aprobación e implementación de la recomendación planteada en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, fue solventada la necesidad en materia agraria y la defensa técnica en materia contenciosa administrativa.

Seguidamente, se realizó un balance general de la materia agrario de los primeros tres trimestres del 2019:

Figura 6 Balance general de los procesos de materia agraria a nivel nacional en la Defensa Pública del primer semestre de 2019

Durante los primeros tres trimestres de 2019 se finalizaron 975 asuntos, de 1317 que ingresaron, logrando una efectividad de 74%, acumulando un 26% (342) en el circulante, lo que muestra un incremento en el circulante al finalizar de un 25%.

Seguidamente se realizó una comparación de los asuntos terminados en los Juzgados Agrarios y los asuntos terminados por las Defensas Públicas en Materia Agraria a nivel nacional al tercer trimestre del 2019.

Figura 7 Comparativa entre asuntos terminados en los Juzgados Agrarios y las Defensas Públicas en materia Agraria, al tercer trimestre de 2019

Nota: En lo referente a la información de la Defensa Pública los datos del primer y segundo trimestre fueron facilitados por el Subproceso de Estadística, en lo que respecta al tercer trimestre son datos preliminares facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados por el Subproceso de Estadística y la Administración de la Defensa Pública.

El total de 975 asuntos terminados por la Unidad Agraria de la Defensa Pública representa un 35% del total de 2 822 asuntos terminados en los Juzgados Agrarios a nivel nacional. El restante de 1847 (65%) asuntos terminados pueden estar asociados a la representación de abogado particular; así como, causas que se presentaron ante los Juzgados Agrarios sin patrocinio letrado.

Por otra parte, en consulta realizada el 5 de marzo de 2019 al Lic. Mario Alberto Rosales Vargas, Coordinador a.i de la Unidad de Agrario sobre la cuota de circulante por plaza de Defensor Público Agrario a nivel nacional, señala que una cuota máxima que puede llevar un Defensor es de 150 a 180 procesos o expedientes, dado a la complejidad de la materia, por factores cualitativos como el tiempo de traslado, visitas previas a campo, atención de poblaciones vulnerables y la atención de contrapartes.

El Consejo Superior del Poder Judicial, mediante el acta N° 023-2018 del 21 de marzo de 2018 en el artículo LVI, se acordó tener por rendido el informe presentado por la máster Damaris Vargas Vásquez, en calidad de Gestora del Proyecto de Implementación de la Reforma Procesal Agraria e Integrante de la Comisión de la Jurisdicción Agraria; el cual contiene el oficio N° 1284-213-AUO-2014 de Auditoría Judicial denominado *“Estudio Operativo del proceso Agrario (Primera Instancia)”*, donde se dispuso establecer como cuotas mínima de señalamientos a realizarse por semana, por cada persona juzgadora agraria, al menos tres audiencias en el despacho y dos fuera de la sede de éste. Esta cuota de trabajo por persona juzgadora se mantiene según el informe **630-PLA-RH-MI-2019** ***“Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Nuevo Código Procesal Agrario para el 2020”***, el cual fue aprobado por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria 44-19 (Presupuesto 2019) el 16 de mayo de 2019 y, aprobado por Corte Plena el 06 de junio de 2019 en la sesión 47-19, artículo VI. Para el informe de informe de impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del nuevo Código Procesal Agrario para el 2021, la Dirección de Planificación mantiene la cuota de trabajo descrita anteriormente.

En este particular, con la finalidad de determinar la carga de trabajo por Oficina, en el siguiente cuadro se detalla el circulante y cantidad de asuntos entrados por recurso Defensor Público.

Tabla 7 Relación de asuntos entrados y circulante por recurso Defensor Público,

al tercer trimestre del 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oficinas de la Defensa Pública** | **Cantidad de Recurso Defensor** | **Entrada al III Trimestre 2019** | **Entrada mensual, por Defensor** | **Circulante activo** | **Circulante** | **Promedio de entrada + Circulante** |
| **por Defensor** |
| Defensa Pública San José | 2 | 23 | 3 | 74 | 37 | 45 |
| Defensa Pública I Circuito Judicial Zona Sur | 1 | 45 | 5 | 121 | 121 | 129 |
| Defensa Pública II Circuito Judicial Zona Sur (Corredores) | 1 | 65 | 7 | 119 | 119 | 127 |
| Defensa Pública Buenos Aires | 1 | 45 | 5 | 98 | 98 | 106 |
| Defensa Pública I Circuito Judicial Alajuela | 1 | 77 | 9 | 114 | 114 | 122 |
| Defensa Pública III Circuito Judicial Alajuela (San Ramón) | 1 | 148 | 16 | 139 | 139 | 147 |
| Defensa Pública II Circuito Judicial Alajuela | 1 | 85 | 9 | 178 | 178 | 186 |
| Defensa Pública Upala | 1 | 123 | 14 | 185 | 185 | 193 |
| Defensa Pública Cartago | 1 | 77 | 9 | 152 | 152 | 160 |
| Defensa Pública Turrialba | 1 | 113 | 13 | 119 | 119 | 127 |
| Defensa Pública I Circuito Judicial Guanacaste (Liberia) | 1 | 62 | 7 | 125 | 125 | 133 |
| Defensa Pública Santa Cruz | 1 | 88 | 10 | 199 | 199 | 207 |
| Defensa Pública Puntarenas | 1 | 87 | 10 | 175 | 175 | 183 |
| Defensa Pública I Circuito Judicial Zona Atlántica (Limón) | 2 | 166 | 18 | 438 | 219 | 227 |
| Defensa Pública II Circuito Judicial Zona Atlántica (Pococí) | 1 | 113 | 13 | 218 | 218 | 226 |
| Total | 17 | 1317 |  | 2454 |  |  |
| **Promedio Nacional** | **-** | **-** | **8** | **-** | **129** | **-** |

Nota: Los datos del primer y segundo trimestre fueron facilitados por el Subproceso de Estadística, en lo que respecta al tercer trimestre son datos preliminares facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados por el Subproceso de Estadística.

En análisis de los datos proyectados de la Defensa Pública en materia Agraria, se estima una entrada promedio de 8 asuntos por recurso Defensor Público a nivel nacional; así como, un circulante promedio de 129 asuntos por cada plaza de Defensor.

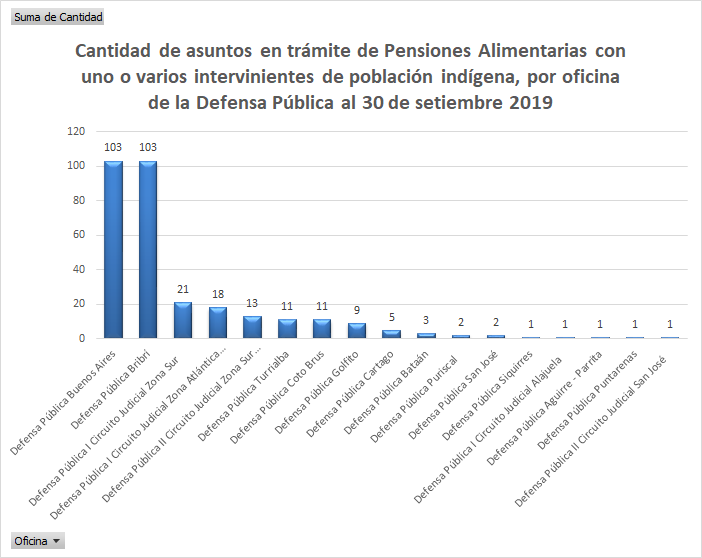
De considerar la entrada promedio de 8 asuntos a nivel nacional más el circulante por cada plaza a diciembre de 2018, se estima un circulante proyectado de aproximadamente 137 asuntos por cada recurso Defensor Público; estando por debajo en 43 procesos (24%) de la cuota establecida de 180 asuntos de circulante por cada plaza de Defensora o Defensor Público.

**En consideración de la carga de trabajo de los recursos defensores a nivel nacional, se estima conveniente mantener la recomendación planteada en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 donde se establece que las plazas de Agrario asuman como carga ordinaria aquellos asuntos en materia Contenciosa Administrativa donde figure como parte actora o demandada una o más personas indígenas. Tal y como lo recomendó la Dirección de la Defensa Pública.**

### Atención de asuntos de Pensión Alimentaria

Con el fin de establecer las Defensa Públicas del país con mayor afluencia de personas indígenas en materia de pensiones alimentarias, se adjunta el siguiente gráfico:

Figura 7 Cantidad de asuntos en trámite de Pensiones Alimentarias con uno o varios intervinientes de población indígena, por ofídica de la Defensa Pública al 30 de setiembre de 2019



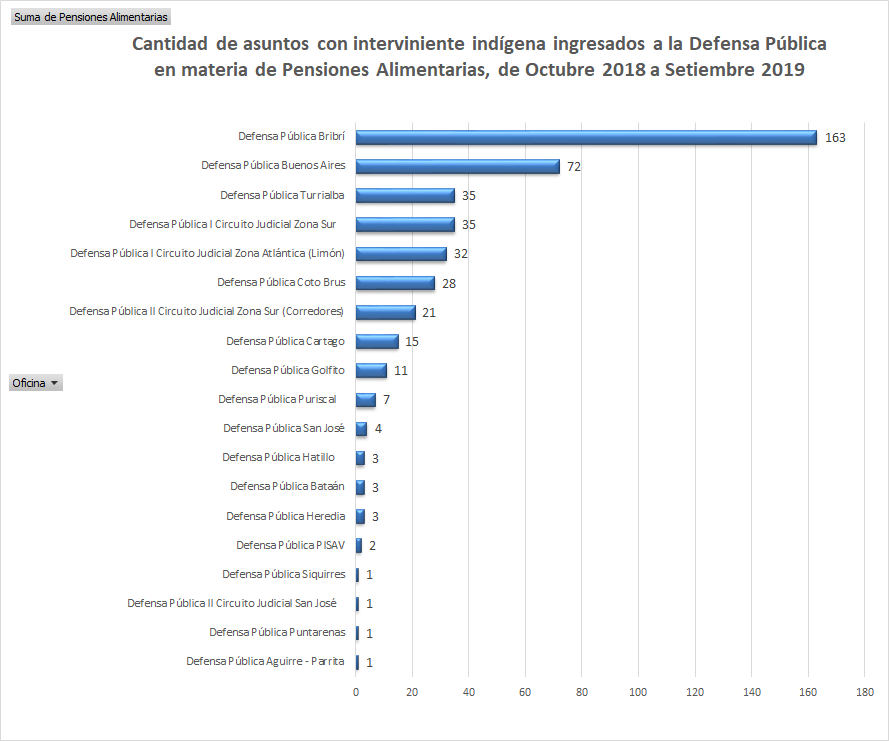
**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Al tercer trimestre del 2019 existían 306 asuntos en trámite en la Defensa Pública, en los que figuraba una o varias personas pertenecientes a poblaciones indígenas, del total de asuntos un 68% esta centralizado en las oficinas de Bribri y Buenos Aires, con un 34% cada una; seguidos de Pérez Zeledón con un 7% y Limón con un 6%.

De tal modo, es posible determinar que los asuntos en trámite en Bribri y Buenos Aires de forma separada, superan en un 80% a los casos en trámite en la Defensa Pública con el tercer lugar, en materia de Pensiones Alimentarias.

Por otro lado, tomando como insumo lo establecido en la tabla 1 del presente informe, donde se determinó que la relación de asuntos entrados e intervinientes en Pensiones Alimentarias es de uno a uno; seguidamente, se procede a analizar los asuntos en trámite por cantidad de personas indígenas.

Figura 8 Cantidad de asuntos con interviniente persona usuaria indígena ingresados en materia de Pensiones Alimentarias, de octubre 2018 a setiembre 2019



**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Del gráfico anterior, se señalan las siguientes conclusiones como principales:

* De las 19 defensas públicas en las que ingresaron asuntos con intervinientes indígenas, se vislumbra que el 83% de los asuntos ingresan en 6 oficinas, encabezadas por Bribri con 163 (37%) asuntos y Buenos Aires con 72 (16%), luego Turrialba y Pérez Zeledón con 35 (8%) cada una; y finalmente, Limón con 32 (7%) y Coto Brus con 28 (6%) asuntos. El restante 17% de los asuntos ingresados está distribuido en las otras 13 oficinas.
* En Bribri ingresaron más del doble de asuntos que en Buenos Aires y más del cuádruple de asuntos que en Turrialba y Pérez Zeledón.
* En Buenos Aires se atendieron el doble de asuntos que en las oficinas de Turrialba y Pérez Zeledón.
* Los datos estadísticos de la Defensa Pública poseen una concordancia lógica con la información tomada del INEC, en relación a la densidad de población indígena según territorio.

Por otro lado, anteriormente se le consultó a la Licda. Sandra Mora Venegas, Supervisora en Pensiones Alimentarias de la Defensa Pública, sobre la estructura funcional para la atención de pensiones alimentarias de las oficinas de Bribri y Buenos Aires, manifestando:

### Defensa Pública de Buenos Aires:

Una plaza de Defensor Público de la Oficina de Pérez Zeledón, se desplaza los martes y miércoles a la zona de Buenos Aires, para atender los asuntos en materia de Pensión Alimentaria. El tiempo de traslado de ida y regreso entre una Oficina a otra es de aproximadamente de dos horas.

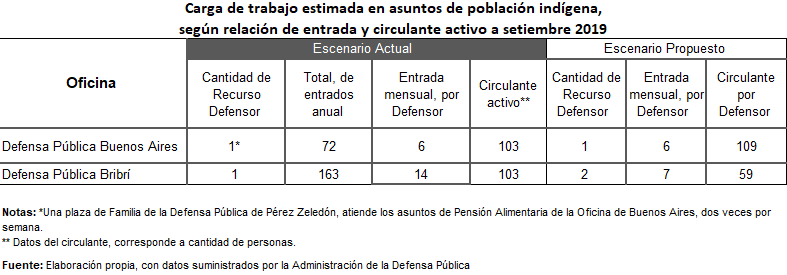
### Defensa Pública de Bribrí

Cuenta con una plaza de Defensor Público para la atención de Pensiones Alimentarias. En los casos donde figure una persona indígena como parte demandada, son atendidos por una plaza de Defensor Público de Limón los miércoles de cada semana.

Aunado a lo anterior, es relevante resaltar que la Defensa Pública de Limón, a parte de la colaboración facilitada a Bribrí; además, colabora con un recurso de Defensor Público cada 15 días para asistir el Valle de la Estrella, y con otro recurso se apoya en la toma de demanda de la Defensa Pública de Matina los lunes de cada semana.

Seguidamente se adjunta un cuadro donde se analiza la carga ordinaria de trabajo según los asuntos en trámite y entrados en relación con la cantidad de recurso defensor que hay actualmente en las oficinas de Buenos Aires y Bribri (ver apéndice 2), así como, el escenario aprobado por el Consejo Superior propuesto en el informe 634-PLA-RH-MI-2019.

Tabla 8 Carga de trabajo estimada en asuntos de población indígena, según relación de entrada de octubre 2018 a setiembre 2019 (12 meses) y el circulante activo al cierre de setiembre 2019



**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

En virtud del cuadro anterior, se proyecta que en el escenario propuesto el circulante mensual por persona defensora en Buenos Aires rondará los 109 asunto, donde 103 asuntos corresponderán el circulante y alrededor de 6 asuntos ingresarían mensualmente. En el caso de Bribri, se estima que el circulante mensual por persona defensora será de 59 asuntos, de los cuales 52 corresponderán a circulante y 7 a la entrada mensual.

Ahora bien, según los datos estadísticos del primer semestre del 2019, es importante destacar que la plaza de persona defensora en Bribri para atención de materia de Pensiones Alimentarias posee un promedio mensual de casos entrados totales de 30 asuntos y la plaza de que da apoyo en Buenos Aires tiene una entrada mensual promedio total de 19 asuntos.

En consecuencia, resulta importante resaltar y mantener los aspectos planteados en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, en lo que respecta a la estructura funcional que deberán seguir para un máximo aprovechamiento del recurso:

* Que la Jefatura de la Defensa Pública mantenga la colaboración que presta actualmente por medio una plaza de Defensor Público proveniente de la Oficina de Pérez Zeledón para la atención de intereses contrapuestos en Buenos Aires. La Defensa Pública de Bribri, en caso de aprobarse el contenido presupuestario contará con dos plazas de Pensión Alimentaria, tendrá la capacidad de atender los asuntos de intereses contrapuestos; de manera que la plaza de la Defensa Pública de Limón, que brinda la colaboración los miércoles de cada semana, se podrá avocar a asuntos propios de la Oficina de Limón.

En razón a lo expuesto, y en consideración de factores cualitativos tales como, la calidad de atención a partir de un acceso de justicia efectivo, y reconocer las necesidades de atención diferenciada, se propone establecer una plaza de Defensor Público con la modalidad a tiempo completo, el cual se estima que tendrá una entrada mensual de 7 asuntos de Pensión Alimentaria; además, deberá asumir la competencia de asuntos en materia de Familia.

* En el caso de que la carga de trabajo este por debajo de su capacidad instalada , para las personas defensoras públicas asignadas a la atención de pensión Alimentaria de las Oficinas de Bribrí y Buenos Aires, se le asignen asuntos de materia Penal; siempre, en el entendido de que será predomina este la atención de asuntos de Pensión Alimentaria.
* Mantener la dinámica planteada por la Dirección de la Defensa Pública, a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, donde los asuntos en materia de Familia forman parte del circulante de la Unidad de la Defensa Pública que atiende Pensiones Alimentarias, y en materia de Violencia Doméstica pasan hacer parte del circulante de la Unidad de la Defensa Pública que atiende Penal.
* Por otro lado, en lo referente a materia contravencional, según los datos estadísticos suministrados por la Defensa Pública, en la oficina de Bribri al 30 de setiembre de 2019 existían 3 asuntos que contaban con intervinientes indígenas, lo que representa un 1% del circulante (276) que poseía el Juzgado Contravencional de Bribri al finalizar el tercer trimestre de 2019. En lo referente a la oficina de la Defensa Pública de Buenos Aires el circulante correspondía a 43 asuntos, lo que representa un 7% en relación con el circulante (650) que posee el Juzgado Contravencional de Buenos Aires al 30 de setiembre de 2019.

Lo anterior sustentado en que para el 2018 el 85% del circulante activo en Pensiones Alimentarias con interviniente indígena se encontraba en las oficinas de Bribri y Buenos Aires, y para el tercer trimestre del 2019 este dato corresponde a un 70% distribuido en 36% para Bribri y 34% para Buenos Aires, mostrando que si bien es cierto el porcentaje disminuyó contra el año anterior, la tendencia es la misma; ya que, el restante 30% del circulante se diluye entre 15 oficinas.

## Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación

En sesión del Consejo Superior 44-19 artículo II, se aprobó el informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación referente al impacto de la entrada en vigencia de la ley 9593 de acceso a la justicia a pueblos indígenas, posteriormente la Corte Plena en sesión 47-19 (Presupuesto 2020), celebrada el 23 de mayo de 2019 aprueba la comunicación del informe 102-CSP-19 y remite a la Dirección de Gestión Humana el acuerdo tomado donde se aprueba cambiar a condición ordinaria siete plazas extraordinarias de Defensora o Defensor Público que mantiene asignada la Unidad Agraria de la Defensa Pública.

Además, mediante la minuta 29-PLA-MNTA-2020 del 03 de febrero del 2020, la Sub Jefatura de la Defensa Pública expone dichas plazas de Defensora o Defensor Público se encuentran condición ordinaria a partir del presente año.

Por otro lado, de acuerdo con la consulta realizada al Tribunal Contencioso Administrativo, en el correo electrónico enviado el 03 de febrero de 2020; se menciona que el despacho continúa trabajando con los filtros que se indican en el Sistema de Gestión, por lo que se tiene la limitación para diferenciar los asuntos con interviniente persona usuaria indígena o persona servidora judicial. Los asuntos que se pueden diferenciar y, por ende, filtrar, son los que mantienen como interviniente una asociación indígena o la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas.

Aunado al párrafo anterior, se consulta al Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, mediante el correo enviado el 03 de febrero de 2020, sí se ha incorporado una fórmula para contabilizar los procesos judiciales que mantengan como interviniente una persona usuaria indígena o persona servidora judicial. Es así que, el 04 de febrero de 2020, el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación indica que ha sido incorporado dentro de las bases de datos la variable “etnia” y que, para los Anuarios Judiciales del 2019, se visualizará dicha variable en los cuadros estadísticos. Adicionalmente, se consulta vía telefónica, y la identificación de los asuntos que donde una persona judicial esté en condición de interviniente, a la fecha no ha sido implementada.

Con respecto a la implementación del Sistema de Seguimiento de Casos (SSC) en materia agraria en la Defensa Pública, se consultó al Lic. Roberto Montero García, quién se encontraba al día 10 de febrero de 2020 como responsable de la implementación del SSC en la Defensa Pública, quien indica que la Dirección de Tecnología de la Información se encuentra realizando los ajustes indicados por el Lic. Mario Rosales Vargas, Coordinador de Agrario, de manera que el sistema se adecúe a la materia en gestión. Una vez que los ajustes se encuentren realizados y aprobados por el Lic. Rosales Vargas, se procederá con la implementación a nivel nacional.

* **Recomendaciones a la Dirección de Tecnología de Información**

En lo referente a las recomendaciones emitidas por en el informe 634-PLA-RH-MI-2020 hacia la Dirección de Tecnología de Información se plantearon las siguientes:

* Establecer una mejora a nivel del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, Gestión en línea, CEREDOC, Escritorio Virtual y Sistema de Seguimiento de Casos, de forma tal que desde el Juzgado y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; así como, para el resto de las materias, se permita identificar la cantidad de asuntos donde figuran como intervinientes personas servidoras judiciales e indígenas, sea como Asociación Integral de Desarrollo, o como persona física.
* Coordinar lo relacionado con la implantación y capacitación del Sistema de Seguimientos de Casos (SSC) y SIGMA en las Oficinas de la Defensa Pública que atiendan materia Agraria, con fin de obtener datos estadísticos para futuros estudios.

En consecuencia, se efectuó una consulta el 3 de febrero de 2020 al Juzgado y al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con el fin de conocer si dicha recomendación había sido implementada en los sistemas, a lo que se recibió una respuesta negativa.

Posteriormente, el 27 de marzo de 2020, se consultó al Lic. Uriel García Regalado, Profesional Informático de la Dirección de Tecnología de Información sobre el estado de las dos recomendaciones, a lo que manifestó que el Consejo Superior en mediante oficio 13919-17 acordó lo siguiente:

“*(…) autorizar la suspensión del desarrollo de nuevas solicitudes de mejoras para los sistemas actuales utilizados para la gestión y tramitación de expedientes y oficinas judiciales.*”

Lo anterior debido a que todos los esfuerzos se están centrando en el desarrollo de la nueva plataforma informática que está desarrollando la Dirección de Tecnología de Información.

Posteriormente, se remitió un correo electrónico a la Dirección de Tecnología de Información para conocer el estado actual de las mismas, sin embargo, no se recibió respuesta al momento de remitir el informe.

Por último, en respuesta al informe 507-PLA-RH-MI-2020 mediante el oficio 662-DTI-2020 del 3 de abril la Licda. Fabiola Arancibia Hernández, Coordinadora de la Unidad de Implantaciones de la Dirección de Tecnología de Información manifiesta:

*"(...) Sobre las Implantaciones del SSC (Sistema de Seguimiento de Casos), me permito señalar que la unidad de Implantación no cuenta con la capacidad operativa para asumir las implantaciones del SSC, es por lo que actualmente la Defensa Publica cuenta con una persona encargada de las implantaciones de la Defensa Pública, bajo la administración y coordinación de la Defensa Pública. Por parte de la unidad de Implantaciones se ha colaborado en algunos aspectos de coordinación a lo interno de la Dirección de Tecnología para las configuraciones. Así mismo, al ser un solo recurso dedicado a las implantaciones, se coordinó con la Dirección de Planificación para establecer un orden y lograr las implantaciones de diferentes unidades que intervienen en las materias de Agrario, Ejecucion de la Pena (Penal), Pensiones.*

*Actualmente se tiene validado las funciones del SSC para las unidades de Ejecución de la Pena por lo que se han iniciado desde finales del 2019 las implantaciones de esas unidades. Cabe señalar que se tiene en proceso la validación del funcionamiento del sistema para las Unidades de Agrario y Pensiones Alimentarias, una vez que se cuente con esa validación, la defensa podría continuar con las implantaciones en esas unidades según la prioridad establecida por la Dirección de Planificación."*

En virtud de lo expuesto, se deberá esperar la validación del funcionamiento del sistema para las Unidades Agrarias y de Pensiones Alimentarias, para posteriormente continuar con las implantaciones, lo anterior supeditado a la capacidad operativa de la Unidad encargada en la Dirección de Tecnología de Información y el profesional en informática asignado a la Defensa Pública.

Asimismo, mediante el oficio 0712-DTI-2020 la Dirección de Tecnología de Información comunica lo siguiente:

*“La Unidad de Inteligencia de la Información desarrollará durante el primer semestre de 2020 la mejora para extraer los datos de la variable etnia del Sistema de Seguimiento de Casos, con esto la información de los casos de la Defensa Pública se mostrarán dentro de las estadísticas en los reportes del SIGMA.”*

* **Recomendaciones a la Jefatura de la Defensa Pública:**

Mediante el oficio JEFDEP-90-2020 (ver anexo 6) del 13 de febrero de 2020 la Jefatura de la Defensa Pública remitió el seguimiento que ha realizado, en lo referente a las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019:

*“(…)*

* 1. ***Analizar en un plazo de seis meses, posterior de la entrada de vigencia de la ley 9609 “Código Procesal Agrario” la carga de trabajo de cada plaza de Defensor Agrario, de manera que, de no alcanzar la cuota establecida de los 180 asuntos, se le asigne asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo.***

*La ley 9609 “Código Procesal Agrario” no ha entrado en vigencia aún. Sin embargo, actualmente las 16 plazas de personas defensoras públicas agrarias tienen un promedio de 158 procesos, con una cantidad mayor de intervinientes.*

La Defensa Pública reporta aproximadamente 2528 expedientes, mientras que los Juzgados Agrarios reportan, al cierre de enero 2020, un total de 6987 expedientes, lo que da a entender que se mantiene un alto índice de defensa privada.   
  
El promedio de 158 expedientes por Defensor(a) está por debajo de la cuota establecida por el coordinador de la DP, que es de 180.

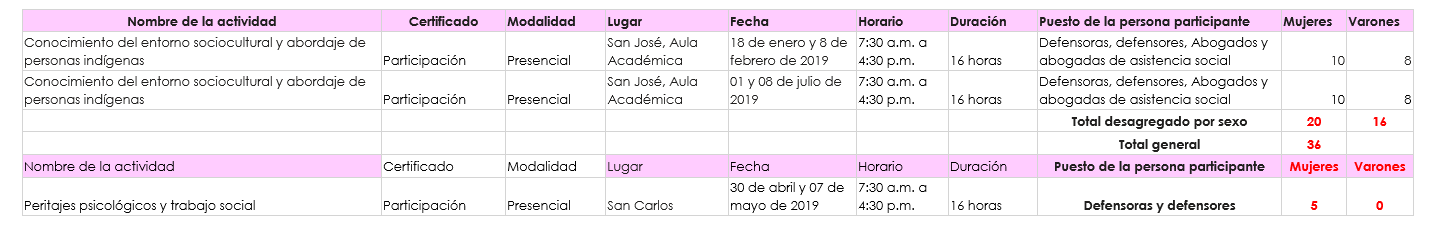
* 1. ***Asignar asuntos de materia Penal, a las plazas de Defensor Público de la Unidad de Pensiones Alimentarias que se encuentren asignadas a las Oficinas de la Defensa Pública de Bribrí y Buenos, esto en caso de que la carga de trabajo no alcance. Considerando que de manera prioritaria se deberá atender los asuntos de Pensión Alimentaria.***

*No se ha asignado ninguna plaza de pensiones alimentarias en Buenos Aires y Bribri según los términos referidos en este informe.*

* 1. ***Comunicar bajo una circular interna de la Dirección de la Defensa Pública a las distintas Oficinas, la importancia de hacer uso y reportar de forma correcta en los cuadros estadísticos la variable de cantidad de personas usuarias de la Defensa Pública que pertenecen a algún grupo indígena, servidor judicial, con ingreso durante cada período; dado a que, los datos remitidos al Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, son los que se utilizarán como base para futuros estudios que permita mejorar el acceso a la justicia de dicha población.***

*Desde agosto de 2019 se socializó con todas las Defensas Públicas a nivel nacional la “Fórmula Ley 9593 de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas”, a fin de visibilizar los procesos que ingresen con personas indígenas en materias no tradicionales. En el mes de febrero de 2020, se le realizó un adendum que incluye una plantilla para anotar datos como número de expediente, fecha de entrada, estado del proceso, etc. (Se adjunta la fórmula.)*

* 1. ***Coordinar la respectiva capacitación a las personas defensoras públicas de tal forma que puedan incursionar en otras áreas de servicio, ya que según la ley de control interno se debe dar el mayor aprovechamiento de los recursos y en este caso particular en la distribución de las cargas de trabajo.***

*Según la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública en el año 2019 se impartieron las siguientes capacitaciones: “*

*Asimismo, se impartieron una* ***serie de videoconferencias****, como parte del ciclo 1 y se registró los siguientes datos:*

*Total de personas participantes: 28*

*Mujeres: 21*

*Hombres:7*

*Fecha: 27 de marzo*

*Además, en materia contenciosa tuvimos una capacitación el 21 de marzo de 2019 con don Roberto Montero.  Y una serie de charlas los días 15, 22 y 29 de noviembre por parte de los jueces contenciosos administrativos.*

*Actividad formativa: Contencioso administrativo*

*Fecha: 21 de marzo 2019*

*Total de personas participantes: 22*

*Mujeres: 10*

*Hombres: 12*

*Actividad formativa: Contencioso administrativo*

*Fecha: 15, 22 y 29 de noviembre de 2019*

*Total de personas participantes: 6*

*Mujeres: 1*

*Hombres: 5”*

* **Recomendaciones a la Dirección de Gestión Humana:**

Mediante correo electrónico del 3 de febrero de 2020, se le solicitó a la Dirección de Gestión Humana, información referente al que trabajo que se ha realizado para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Dirección de Planificación; sin embargo, al 27 de marzo de 2020 no se recibió respuesta al respecto, por lo tanto, se considera necesario mantener las mismas recomendaciones del informe 634-PLA-RH-MI-2019:

*(…)*

* 1. *Realizar la valoración del perfil de la plaza ordinaria de Defensor Público, proveniente de la Secretaría Técnica de Género y de Acceso a la Justicia, en caso de que se apruebe el que asuma las funciones encomendadas en la atención de asuntos de Asuntos Agrarios y Contencioso Administrativo, donde figure como intervinientes personas indígenas y servidores judiciales; además, de la atención de asuntos ordinarios que así disponga la Dirección de la Defensa Pública.*
  2. *Considerar en las condiciones para contratar al nuevo personal las disposiciones de la nueva ley aprobada en su artículo 7 que indica: Asistencia letrada gratuita y gratuidad de la justicia. En aquellos procesos judiciales en que una persona indígena requiera asistencia letrada y no pueda cubrir los costos, la administración de justicia proveerá la asistencia de una persona defensora pública especializada en derecho indígena y en la materia de competencia de forma gratuita…., . Adicionalmente, proponer en los concursos de estas nuevas plazas, que las personas contratadas dispongan del conocimiento de los diferentes idiomas indígenas de tal forma que se pueda brindar un acceso real y más directo a las personas asistidas en estas zonas.*
  3. *Analizar en los nuevos concursos habilidades blandas como:*
* *Disposición para realizar las diligencias in situ*
* *Utilizar diferentes medios de transporte (caballo, camión, bote, panga, etc.)*
* *Comprender que la condición social y cultural implica procesos cuyo tiempo para invertirles es mayor, pues los canales de comunicación son diversos en los diferentes procesos y según el género.*

*6.11 Analizar en conjunto con la Defensa Pública las condiciones de los concursos en propiedad de las plazas que atienden la materia agraria, de tal forma que se amplié su condición para que las mismas puedan atender eventualmente otras materias, así como trasladarse a las diferentes zonas que disponga la Dirección de la Defensa Pública.”*

Por otro lado, el 27 de abril de 2020 se recibió de forma extemporánea el oficio PJ-DGH-SAP-135-2020 de la Licda. María Gabriela Mora Zamora, Jefa de Sección de Análisis de Puestos, donde en relación con el trabajo que se realiza a favor del cumplimiento de la Ley 9593, manifiesta lo siguiente:

*“Por otra parte, se debe informar que lo relativo a las condiciones que se deben considerar al contratar nuevo personal, producto de la promulgación de la “Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas”, que la Sección de Análisis de Puestos se encuentra trabajando en la elaboración de las descripciones de clases de puestos para los cargos de Defensor Público; por tal razón los aspectos citados en los puntos transcritos se estarán analizando y valorando si técnicamente corresponde incorporarlos en las descripciones de clases de puestos; aunado a lo anterior, es dable mencionar que nuestra dependencia, está a la espera de que la Defensa Pública indique respecto a los alcances esta ley en las tareas de los puestos de Defensor Público.”*

## Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal en la Defensa Pública

La Corte Plena en la sesión 37-12 del 29 de octubre de 2012, artículo VIII, solicitó definir el modelo de gestión de despachos, posteriormente, en la sesión 15-16 del 16 de mayo de 2016, artículo XVII, aprobó el informe 259-66-SAO-2016 de la Auditoría Judicial relacionada al “Estudio Operativo de los Tribunales Penales.”

En consecuencia, en sesión del Consejo Superior 5-2019, artículo XXII del 23 de enero de 2019, se tuvo por rendido el informe 1507-PLA-MI-2018, relacionado con el *“Modelo de Tramitación de la Defensa Pública”*.

Este modelo de tramitación establece una serie de parámetros generales de las características de las oficinas de la Defensa Pública, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta para brindar un servicio público de calidad e incrementar la cantidad de debates con la participación de los ámbitos auxiliares de justicia. La metodología aprobada establece dentro de la fase de diseño de propuestas de mejora, la posibilidad de elaborar rediseños de oficinas con el fin de maximizar la utilización de los recursos disponibles.

En consecuencia, se estima conveniente que dentro de los alcances del modelo y en los casos que técnicamente corresponda, se tome en consideración la posibilidad de movilizar plazas de personas defensoras, para solventar las necesidades institucionales de atención a personas indígenas, en virtud del impacto organizacional y presupuestario en la Defensa Pública, a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas. Lo anterior en el entendido que una posible movilización de recursos dependerá meramente de los estudios técnicos realizados y de una priorización según las necesidades institucionales previamente detectadas.

### Oficinas de la Defensa Pública abordadas en el Proyecto Modelo Integral del Proceso Penal

Desde el año 2019, la Dirección de Planificación se ha mantenido haciendo abordajes en materia penal en las diferentes oficinas de la Defensa Pública y, según el apartado del presente informe denominado “Aspectos demográficos a considerar”, las oficinas abordadas en el proyecto que son cercanas a las zonas de mayor cantidad de personas usuarias indígenas son la Defensa Pública de Limón y Bribrí.

Producto del abordaje de la Defensa Pública se Bribri se infiere que, con base en el análisis estadístico, la demanda en la cantidad de asuntos nuevos o ingresados de la oficina tiende al crecimiento y, que la carga de trabajo reportada por persona defensora se encuentra por encima de la carga definida en el Modelo de Tramitación de la Defensa Pública; además, de que hay que considerar que el 24% de los asuntos activos en estado en trámite presentan al menos una persona usuaria indígena en calidad de interviniente y por tal, se deben considerar aspectos cualitativos en la atención de esta población para obtener un servicio público de calidad. En consecuencia, se estableció la necesidad de contar con un recurso adicional de Persona Defensora que colabore en materia penal, lo anterior supeditado a las limitaciones presupuestarias.

Aunado a lo anterior, también se realizó el abordaje en la Defensa Pública de Limón, donde se determina, por medio del análisis estadístico, que la demanda en la cantidad de asuntos nuevos en materia penal ordinaria se la mantenido aproximadamente constante en el tiempo y, que la carga de trabajo reportada por cada persona defensora en materia penal ordinario se encuentra dentro de los parámetros definidos en el Modelo de Tramitación de la Defensa Pública. Adicionalmente, por cargas de trabajo reportadas por las Técnicas o Técnicos Jurídicos se considera que, de encontrarse las condiciones idóneas, se podría recalificar una de esas plazas a Defensora o Defensor Público y así, atender las necesidades de la zona. No obstante, esta propuesta está sujeta a las aprobaciones correspondientes.

Además, es importante hacer recalcar que, la Dirección de Planificación durante el 2019 realizó el abordaje en las oficinas de la Defensa Pública de Flagrancia del Primer y Segundo circuito Judicial, donde, con base en el análisis de cargas de trabajo y la capacidad del proceso expedito de Flagrancia, se podría eventualmente trasladar recursos de Defensora o Defensor Pública donde se considere exista mayor necesidad del mismo. Sin embargo, esta recomendación se encuentra sujeta a la aprobación de los Modelos de Flagrancia, tanto en el Ambiento Auxiliar de Justicia, como en el Ámbito Jurisdiccional.

Por lo anterior, se evidencia que producto de los abordajes de la Dirección de Planificación se han brindado alternativas para solventar las necesidades instituciones, en las zonas del país que más lo requieren. Sin embargo, estas alternativas de solución se encuentran sujetas a la aprobación de los informes respectivos y actualmente son objeto de seguimiento.

# Contenido presupuestario

En el siguiente cuadro, se detalla el costo estimado de las dos plazas extraordinarias de Defensor Público, las cuales asumirán como parte de la carga de trabajo ordinaria la atención de los asuntos de Pensión Alimentaria donde figure como parte actora o demanda una o más personas indígenas. Además, se estima el costo estimado del mobiliario y equipo a asignar a las plazas en mención.

Tabla 9 Estimación del costo estimado para el 2021, dos plazas extraordinarias de Defensor Público que atienden materia Pensión Alimentaria.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Despacho** | **Cantidad** | **Tipo de plaza** | **Condición actual** | **Recomen-dación** | **Período** | **Costo Estimado** |
| Unidad de Pensión Alimentaria de la Dirección de la Defensa Pública | 2 | Defensor Público | - | Extraordinaria | 12 meses | ₡105.734.000 |
|  | | | | | | ₡3.356.545,00 |
|  | | | | | | **₡109.090.545,00** |

**Nota (1):** *Costo promedio por puesto de Defensor Público, para el 2021 es de ₡52.867.000*

**Nota (2):** *Costo total de gasto variable por cada plaza Profesional (Defensor Público), para el 2021 es de ₡1.678.273*

**Fuente:** Modernización Institucional, con datos suministrados del Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos de la Dirección de Planificación

En relación a los recursos que se requieren para completar la cobertura a nivel nacional de la materia de pensiones se ratifica la necesidad, sin embargo, esta deberá constar como parte de la extensión del servicio en pensiones y no en el impacto de este estudio que nos ocupa.

# Elementos resolutivos

* Según los datos demográficos, la competencia territorial, los asuntos en trámite y asuntos ingresados y terminados por materia, se determinó que, en razón del análisis de las cargas de trabajo de las diferentes oficinas de la Defensa Pública que tramitan asuntos con personas usuarias indígenas, se deben reforzar de manera prioritaria las oficinas de Bribri y Buenos Aires, específicamente en la materia pensión alimentaria. Es importante ratificar que, con base en el criterio de la Dirección de Planificación en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 del análisis presupuestario del 2020 a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, se identifica la necesidad de recurso defensor en estas dos oficinas y, continúa siendo la necesidad para el periodo presupuestario 2021.

Lo anterior sustentado en que para el 2018 el 85% del circulante activo en Pensiones Alimentarias con interviniente indígena se encontraba en las oficinas de Bribri y Buenos Aires, y para el tercer trimestre del 2019 este dato corresponde a un 70% distribuido en 36% para Bribri y 34% para Buenos Aires, mostrando que si bien es cierto el porcentaje disminuyó contra el año anterior, la tendencia es la misma; ya que, el restante 30% del circulante se diluye entre 15 oficinas.

* En lo referente a la atención de materia Agraria y Contenciosa Administrativa, el Consejo Superior en la sesión extraordinaria 44-19 (Presupuesto 2020) artículo II, del 16 de mayo de 2019 acordó que a partir del año 2020 las siete plazas de recurso defensor que se encontraban extraordinarias para la atención de materia agraria, pasaron a condición ordinarias; asumiendo la defensa técnica de aquellos asuntos Contenciosos Administrativos donde figure como parte actora o demandada una o más personas indígenas. Aunado a lo anterior, en el análisis de cargas de trabajo del presente informe se determina que, el circulante de las plazas de Defensora o Defensor Público en materia Agraria a nivel nacional se encuentra en 115 procesos o expedientes, estando este promedio nacional 65 asuntos por debajo de la cuota establecida por la Coordinación en Materia Agraria de la Defensa Pública, lo equivalente a un 36% menos; debido a que la cuota establecida de 180 asuntos de circulante por persona defensora. Por lo anterior y por la competencia de estas plazas, se considera que continúan manteniendo la capacidad para dentro de su carga de trabajo ordinaria asuman aquellos asuntos en Materia Contenciosa Administrativa, donde figure como parte actora o demandada una o más personas usuarias indígenas. Importante aclarar que, en el caso de aquellas plazas, donde la carga de trabajo no alcance la cuota establecida, se le asignarán asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo.
* A pesar de que, en consulta al personal del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, aún no se cuente con el identificador de personas servidoras judiciales en calidad de intervinientes dentro de las bases de datos, lo cual resulta que materialmente sea imposible la proyección de la demanda del servicio profesional para ejercer la defensa técnica en los casos que lo ameriten; se considera que estos procesos o asuntos pueden ser asumidos por las Defensoras y Defensores Públicos que asumen los asuntos Contenciosos Administrativos donde intervienen personas usuarias indígenas, de manera que los asuntos con servidores judiciales en calidad de intervinientes contribuyan para completar la carga de trabajo establecida para este personal defensor.
* Resultado del análisis estadístico de los asuntos en materia de Pensiones Alimentarias donde se tiene en calidad de interviniente una persona indígena se concluye que, el 81% de la carga de trabajo a nivel nacional se concentra en las Defensas Públicas de Bribri, Buenos Aires, Pérez Zeledón y Limón, recordando que las últimas dos oficinas brindan apoyo a las dos primeras, donde se encuentra la mayor concentración de asuntos en esta materia. En razón de lo anterior y, tomando en consideración factores cualitativos que permitan brindar un acceso a la justicia efectivo y de atención diferenciada a la población indígena de nuestro país se reitera la necesidad de la incorporación de dos plazas de Defensora o Defensor Público (una en cada oficina), para la atención de asuntos de Pensión Alimentaria dónde figure como parte actora o demandada una persona indígena.
* El proyecto de mejora de mejora integral del proceso penal en las defensas públicas tiene la posibilidad de realizar movilizaciones de personal cuando es técnicamente viable; por lo tanto, según las prioridades institucionales, se deberá considerar el cumplimiento de la ley 9593 de Acceso a la Justicia a la población indígena.
* En virtud de las observaciones realizadas por la Dirección de Tecnología de Información en los oficios 662-DTI-2020 y 0712-DTI-2020 en lo referente a la implantación del Sistema de Seguimiento de Casos se deberá esperar la validación del funcionamiento del sistema para las Unidades Agrarias y de Pensiones Alimentarias, para posteriormente continuar con las implantaciones, lo anterior supeditado a la capacidad operativa de la Unidad encargada en la Dirección de Tecnología de Información y el profesional en informática asignado a la Defensa Pública.
* El informe 507\_PLA-RH-MI-2020 y la incorporación de dos plazas al presupuesto; así como los oficios 553-PLA-RH-MI-2020 y 659-PLA-RH-MI-2020 donde se atienden observaciones de las partes, fueron aprobados por el Consejo Superior en sesión extraordinaria 38-2020 (Presupuesto 2021), celebrada el 17 de abril del año en curso, artículo XXI.
* Posteriormente, en sesión extraordinaria del Consejo Superior 45-2020 del 8 de mayo de 2020, artículo XXII fueron conocidos los oficios 659-PLA-RH-MI-2020 y 660-PLA-RH-MI-2020 donde se atendieron las observaciones planteadas por la Comisión de Acceso a la Justicia y por la Sección de Análisis de Puestos de la Dirección de Gestión Humana; en el mismo se dispuso por el Consejo Superior aprobar ambos oficios de la Dirección de Planificación y sus recomendaciones.
* Finalmente, en sesión extraordinaria del Consejo Superior 48-2020 del 14 de mayo en los artículos VII y X, se dispone mantener lo aprobado por el Consejo Superior en la sesión 38-2020 del 17 de abril de 2020 artículo XXI, y se aprueban los oficios 661-PLA-RH-MI-2020 referente a las reconsideraciones planteadas por la Dirección de Tecnología de Información y el oficio 692-PLA-RH-MI-2020 en respuesta las reconsideraciones presentadas por la Jefatura de la Defensa Pública.

# Recomendaciones

### A Corte Plena

## Escenarios para suplir las necesidades de personal defensor

En razón de las limitaciones presupuestarias, mencionadas en el apartado de antecedentes del presente informe, se plantean dos escenarios para el cumplimiento de la necesidad de personal para el efectivo acceso a la justicia a las personas usuarias indígenas.

### Escenario 1: Inclusión de plazas dentro del presupuesto 2021

Incluir dentro del presupuesto 2021, dos plazas de Defensora o Defensor Público para la atención de asuntos de Pensión Alimentaria, con el fin de dar sostenibilidad al plan de trabajo propuesto en este informe; dado a que, al reforzar la estructura del recurso humano de la Defensa Pública de Bribri y la Defensa Pública de Buenos Aires, se estaría en la capacidad para asumir la atención ordinaria de asuntos donde figure como parte actora o demanda una o más personas usuarias indígenas.

Tabla 10 Estimación del costo estimado para el 2021, dos plazas extraordinarias de Defensor Público que atienden materia Pensión Alimentaria.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Despacho** | **Cantidad** | **Tipo de plaza** | **Condición actual** | **Recomen-dación** | **Período** | **Costo Estimado** |
| Unidad de Pensión Alimentaria de la Dirección de la Defensa Pública | 2 | Defensor Público | - | Extraordinaria | 12 meses | ₡105.734.000 |
|  | | | | | | ₡3.356.545,00 |
|  | | | | | | **₡109.090.545,00** |

**Nota (1):** *Costo promedio por puesto de Defensor Público, para el 2021 es de ₡52.867.000*

**Nota (2):** *Costo total de gasto variable por cada plaza Profesional (Defensor Público), para el 2021 es de ₡1.678.273*

**Fuente:** Modernización Institucional, con datos suministrados del Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos de la Dirección de Planificación

### Escenario 2: Reubicación de personal defensor

Como se menciona en el presente informe, la Dirección de Planificación se encuentra desarrollando el Proyecto “Mejora Integral del Proceso Penal”, donde se considera que, en los casos en que el criterio de este ente técnico lo indique, se podrá plantear la posibilidad de movilizar plazas de Defensora o Defensor Público, con el propósito de suplir la necesidad de personal para la atención de personas usuarias indígenas en la Defensa Pública de Bribri y Buenos Aires, a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas. Lo anterior en el entendido que una posible movilización de recursos dependerá meramente de los estudios técnicos realizados y de una priorización según las necesidades institucionales previamente detectadas.

Importante aclarar que, si bien este escenario no tiene impacto directo en el presupuesto de la institución, se dependerá del cronograma del Proyecto “Mejora Integral del Proceso Penal” y, por ende, se imposibilita determinar el momento en que se podrá suplir las necesidades detectadas en el presente informe.

## Recomendaciones generales

### Al Consejo Superior

* Según recomendación dada por la Comisión de Acceso a la Justicia, valorar la posibilidad de declarar obligatoria la participación de las personas servidoras judiciales en las capacitaciones sobre Derecho Indígena, ampliar a sensibilización, atención y acceso a la justicia de pueblos indígenas en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, especialmente quienes tengan competencia material y territorial para conocer de procesos judiciales vinculados con el pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre y la Circular 188-19 de Corte Plena

Sin embargo, con el fin de contar con un criterio legal, esta recomendación podrá ser remitida previamente a la Dirección Jurídica para su análisis, con el fin de que emita su valoración jurídica respecto a la obligatoriedad

* Según recomendación de la Comisión de Acceso a la Justicia, reiterar la Circular 188-19 de la Secretaria de la Corte del 17 de octubre de 2019 denominada “*Sobre los 21 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica*.”
* A raíz de las manifestaciones emitidas por la Dirección de Tecnología de Información en el oficio 779-DTI-2020 del 29 de abril de 2020, se solicita emitir una circular reiterando a todo el personal judicial la importancia de la adecuada utilización de los sistemas judiciales (entiéndase Gestión, Escritorio Virtual, Seguimiento de Casos, entre otros) y el registro correcto de las variables de poblaciones vulnerables, de tal forma que la información pueda ser utilizada para consulta e insumo para la toma decisiones institucionales.

### A la Jefatura de la Defensa Pública

* Analizar en un plazo de seis meses, posterior de la entrada de vigencia de la ley 9609 “Código Procesal Agrario” la carga de trabajo de cada plaza de Defensor Agrario, de manera que, de no alcanzar la cuota establecida de los 180 asuntos, se le asigne asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo.
* En caso de que se asignen las plazas nuevas a la Defensa Pública por parte de la Asamblea Legislativa, asignar complementariamente asuntos de materia Penal, a las plazas de Defensor Público de la Unidad de Pensión Alimentaria que se encuentren asignadas a las Oficinas de la Defensa Pública de Bribrí y Buenos Aires, para completar las cargas de trabajo. Considerando que de manera prioritaria se deberá atender los asuntos de Pensión Alimentaria.
* Reiterar la circular interna de la Dirección de la Defensa Pública, acerca de la importancia de hacer uso y reportar de forma correcta en los cuadros estadísticos la variable de cantidad de personas usuarias de la Defensa Pública que pertenecen a algún grupo indígena, servidor judicial, con ingreso durante cada período; dado a que, los datos remitidos al Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, son los que se utilizarán como base para futuros estudios que permita mejorar el acceso a la justicia de dicha población.
* Continuar con las capacitaciones a las personas defensoras públicas que manifiesten la necesidad, de tal forma que puedan incursionar en otras áreas de servicio, ya que según la ley de control interno se debe dar el mayor aprovechamiento de los recursos y en este caso particular en la distribución de las cargas de trabajo.

### A la Dirección de Gestión Humana

Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019:

* Considerar en las condiciones para contratar al nuevo personal las disposiciones de la nueva ley aprobada en su artículo 7 que indica: “(…) *Asistencia letrada gratuita y gratuidad de la justicia. En aquellos procesos judiciales en que una persona indígena requiera asistencia letrada y no pueda cubrir los costos, la administración de justicia* ***proveerá la asistencia de una persona defensora pública especializada en derecho indígena y en la materia de competencia de forma gratuita (…)****”****.*** Adicionalmente, proponer en los concursos de estas nuevas plazas, que las personas contratadas dispongan del conocimiento de los diferentes idiomas indígenas de tal forma que se pueda brindar un acceso real y más directo a las personas asistidas en estas zonas.
* Analizar en los nuevos concursos habilidades blandas como:
* Disposición para realizar las diligencias in situ
* Utilizar diferentes medios de transporte (caballo, camión, bote, panga, etc.)
* Comprender que la condición social y cultural implica procesos cuyo tiempo para invertirles es mayor, pues los canales de comunicación son diversos en los diferentes procesos y según el género.
* Analizar en conjunto con la Defensa Pública las condiciones de los concursos en propiedad de las plazas que atienden la materia agraria, de tal forma que se amplié su condición para que las mismas puedan atender eventualmente otras materias, así como trasladarse a las diferentes zonas que disponga la Dirección de la Defensa Pública.
* A raíz de las observaciones emitidas en el oficio CACC-116-2020 de la Comisión de Acceso a la Justicia, se solicita valorar la posibilidad de promover dentro de los concursos de la judicatura las capacitaciones referentes a la atención y acceso a la justicia de los pueblos indígenas.
* A raíz de las observaciones emitidas en el oficio CACC-116-2020 de la Comisión de Acceso a la Justicia, se solicita analizar la posibilidad de incluir la variable de capacitación en Derecho Indígena en los indicadores de evaluación de desempeño y los procesos de reclutamiento, ya sea para nombramientos o ascensos en puestos vinculados con el conocimiento de procesos asociados a personas indígenas.

### A la Dirección de Tecnología de la Información

* Según lo manifestado en el oficio 662-DTI-2020 de la Dirección de Tecnología de Información, la Unidad de Inteligencia de la Información desarrollará durante el primer semestre de 2020 desarrollará la mejora para extraer los datos de la variable etnia del Sistema de Seguimiento de Casos, con esto la información de los casos de la Defensa Pública se mostrarán dentro de las estadísticas en los reportes del SIGMA.
* Se mantiene la recomendación realizada en el informe 634-PLA-RH-MI-2019:Coordinar lo relacionado con la implantación y capacitación del Sistema de Seguimientos de Casos (SSC) y SIGMA en las Oficinas de la Defensa Pública que atiendan materia Agraria, con fin de obtener datos estadísticos para futuros estudios.

### A la Escuela Judicial

Según las observaciones emitidas en el oficio CACC-116-2020 del 14 abril de la Comisión de Acceso a la Justicia, se incorporan las siguientes recomendaciones.

* Priorizar el fortalecimiento de las competencias de los equipos de trabajo que están a cargo de procesos penales vinculados en las poblaciones indígenas.
* Fomentar la capacitación virtual, compartiendo espacios virtuales y presenciales, maximizando tiempos de desplazamientos, recursos económicos, y viáticos, entre otros.
* Verificar que los contenidos de los diseños de las capacitaciones en Derecho Indígena, se incluya al menos:

a) Normativa internacional referida a los derechos de las personas indígenas, entre ellos, el Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países 1957 (Convenio 107 OIT), Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989 (Convenio 169 OIT), Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 2007, Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas OEA 2016.

b) Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculada con pueblos Indígenas incluyendo la Opinión Consultiva 23-2017.

c) Constitución Política, Ley Indígena, Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, entre otras.

d) Jurisprudencia de las Salas de Casación y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; d) Lineamientos y circulares de Corte Plena y del Consejo Superior vinculados con las reglas para los procesos en los que estén involucradas personas indígenas.

Además, los alcances y distinción entre el sistema monista y el pluralismo jurídico. Incluyendo, el establecimiento de un modelo de control y seguimiento a fin de medir el impacto de esas capacitaciones en el fortalecimiento de las competencias de las personas servidoras judiciales que asistan y su concreción en las resoluciones –incluyendo las sentencias- que emitan en los procesos propios de su competencia, con absoluto respeto al principio de independencia judicial y los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, entre otros.

### Al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional

* Según recomendación de la Comisión de Acceso a la Justicia, divulgar en conjunto con el Departamento de Prensa y Comunicación la Circular 188-2019 de la Secretaría de la Corte referente a los 20 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica. Principalmente a lo establecido en los ejes 6 y 7.

Asimismo, se podrá solicitar colaboración a las Administraciones Regionales involucradas para obtener un mayor impacto en el personal judicial de cada zona.

### A la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa y al Centro de Conciliación del Poder Judicial

* Según recomendación de la Comisión de Acceso a la Justicia en el oficio CACC-116-2020 del 14 abril, continuar con la atención de los procesos indígenas, coadyuvando en la búsqueda de soluciones legalmente posibles y con pertinencia cultural, en cumplimiento del mandato que les confiere la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica.

### Al Ministerio Público

* Según recomendación de la Comisión de Acceso a la Justicia en el oficio CACC-116-2020 del 14 abril, valorar la solicitud de establecer un protocolo diferenciado para la atención de personas indígenas en la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, en el entendido que se deberá garantizar la vida y la integridad de las personas; respetando la pertenencia cultural de esas personas en las medidas que se planteen.

### A la Unidad de Acceso a la Justicia

* Según recomendación de la Comisión de Acceso a la Justicia en el oficio CACC-116-2020 del 14 abril, elaborar y remitir a los diferentes ámbitos involucrados un formato o plantilla que contenga todas las variables de interés en lo referente a asuntos indígenas.

Posteriormente, los insumos recabados deberán ser consolidados y será la misma Unidad de Acceso a la Justicia quien elabore un informe con los resultados más relevantes y de interés institucional para la toma de decisiones en relación con la temática indígena.

Este informe deberá ser presentado ante el Consejo Superior con una periodicidad al menos semestral.

### A la Dirección Jurídica

* Emitir un criterio jurídico sobre lo manifestado en el oficio JEFDP-365-2020 de la Jefatura de la Defensa Pública, que indica:

(...)"*se establece por Principio de Legalidad que quien brinda la asistencia letrada debe cumplir dos requisitos:*

*1) especializada en derecho indígena.*

*2) especializada en la materia de competencia.*

*Situación que a la fecha no opera, pues las personas defensoras públicas no tienen una especialidad en derecho indígena, aún y cuando se trata de generar capacitaciones; además se plantea la necesidad de la especialidad en la materia de atención a la persona indígena. Eso nos lleva a considerar que las personas defensoras públicas no deberían de asesorar materias por recargo, que implica otras especialidades, ni que pensiones deba atender penal, o violencia doméstica, ya que justamente por el Principio de Legalidad se requiere la especialización a partir de la condición de la persona usuaria y del tipo de proceso judicial que se asesore."*

Lo anterior debido a las recomendaciones emitidas por la Dirección de Planificación en el presente informe, para la optimización de recursos de la Defensa Pública, tomando en consideración la equidad de las cargas de trabajo entre las personas defensoras y las limitaciones presupuestarias de la institución.

### A la Dirección Ejecutiva

Según las observaciones emitidas en el oficio CACC-116-2020 del 14 abril de la Comisión de Acceso a la Justicia, se incorporan las siguientes recomendaciones:

* Buscar nuevas prácticas que incentiven a la incorporación de más personas indígenas en las listas de personas traductoras, para ello podrá elaborar compañas en coordinación con el Departamento de Prensa y Comunicación; o bien, otros métodos que considere procedentes y de alto impacto.
* Solicitar a todas las Administraciones Regionales del país tomar las medidas necesarias para que el pago a las personas traductoras e intérpretes (principalmente indígenas) se realice de manera oportuna y cumpliendo con todos los requerimientos legales y políticas institucionales, para poder seguir contando con este apoyo.

### Al Despacho de la Presidencia, la Subcomisión de Acceso a la Justicia y la Dirección Ejecutiva

* Según recomendación de la Comisión de Acceso a la Justicia en el oficio CACC-116-2020 del 14 abril, se insta a continuar uniendo esfuerzos para el establecimiento de un convenio interinstitucional con la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica, para que coadyuven con los peritajes culturales necesarios para la atención de los procesos judiciales.

### A la Dirección de la Planificación

Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019:

Una vez que se cuente con la mejora en los sistemas informáticos, que el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, verifique contar con la fórmula estadística de todas las materias para determinar la cantidad de expedientes donde figure una persona indígena, así como servidores judiciales, con el fin de contar con el insumo para futuros estudios que permitan establecer la proyección de la demanda del servicio. Apéndices y Anexos.

# Apéndices

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apéndice** | **Nombre** | **Documento** |
| ***Apéndice 1*** | Memoria de cálculo: Distribución porcentual de posible atención de persona indígena, según territorios y ubicaciones de la Defensas Públicas del país |  |
| ***Apéndice 2*** | Memoria de cálculo: Análisis estadístico |  |
| ***Apéndice 3*** | Memoria de cálculo: Asuntos del Tribunal Contencioso Administrativo |  |
| ***Apéndice 4*** | Minuta de Sesión de Trabajo  Administración de la Defensa Pública 29-PLA-MI-MNTA-2020 |  |
| ***Anexo 1*** | Consulta del estado de la implementación del SSC en materia agraria |  |
| ***Anexo 2*** | Consulta de las capacitaciones brindadas para la tramitación de asuntos con personas indígenas |  |
| ***Anexo 3*** | Consulta al Tribunal Contencioso Administrativo |  |
| ***Anexo 4*** | Consulta a la Dirección de Gestión Humana |  |
| ***Anexo 5*** | Cálculo de los costos presupuestarios |  |
| ***Anexo 6*** | Oficio de la Jefatura de la Defensa Pública |  |
| ***Anexo 7*** | Correo de consulta a la Dirección de Gestión Humana |  |
| ***Anexo 8*** | Datos Estadísticos facilitados por la Administración de la Defensa Pública |  |
| ***Anexo 9*** | Reconsideraciones de la Defensa Pública JEFDP-365-2020 / JEFDP-450-2020 |  |
| ***Anexo 10*** | Oficio 553-PLA-2020 |  |
| ***Anexo 11*** | Oficio 660-PLA-2020 |  |
| ***Anexo 12*** | Oficio 659-PLA-2020 |  |
| ***Anexo 13*** | Oficio 661-PLA-2020 |  |
| ***Anexo 14*** | Oficio 692-PLA-2020 |  |